

Concepción, uno de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

Que se ha iniciado esta causa Rol N° 24-2019 del ingreso de esta Visita Extraordinaria, para investigar el delito de apremios ilegítimos o torturas de que fue víctima doña Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena y determinar la responsabilidad que en tales hechos ha correspondido a ENRIQUE ERASMO SANDOVAL ARANCIBIA, chileno, nacido en la comuna de La Cruz, Valparaíso, el 19 de octubre de 1949, de actuales 73 años de edad, casado, oficial en retiro del Ejército con el grado de Mayor, cédula nacional de identidad N° 6.115.206-7, actualmente cumpliendo condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco.

Dio origen a este sumario la querella criminal de fojas 9 a 18, deducida por los abogados don Manuel Adolfo Montiel Gómez y don Patricio Andrés Robles Contreras, en representación de doña Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena, por los delitos de lesa humanidad constitutivos de detención ilegal y aplicación de tormentos con resultados de lesiones, en detrimento de su representada y en contra de todos aquellos que resulten responsables de los mismos en su calidad de autores, cómplices o encubridores solicitando acogerla a tramitación, decretar las diligencias que se solicitan, someter a proceso a los que aparezcan como responsables y en definitiva sancionarlos al máximo de las penas que señale la ley, con costas.

A fojas 355 y siguientes, con fecha 5 de julio de 2021, se sometió a proceso a Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, como autor del delito reiterado de aplicación de tormentos en la persona de doña Arinda Graciela Ojeda Aravena, previsto y sancionado en el artículo 150 N° 1 del Código Penal vigente a la época de los hechos, cometidos durante varios días del mes de abril de 1981, a contar del 16 de abril de ese año.

Auto de procesamiento que no fue objeto de recurso de apelación.

A fojas 392 y con fecha 25 de enero de 2022, se declara cerrado el sumario.

A fojas 395, con fecha 18 de febrero de 2022, se acusa al mencionado Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, como autor del delito reiterado de aplicación de tormentos en la persona de doña Arinda Graciela Ojeda Aravena, previsto y sancionado en el artículo 150 N° 1 del Código Penal vigente a la época de los hechos, cometidos durante varios días del mes de abril de 1981, a contar del 16 de abril de ese año.

A fojas 407, el abogado querellante don Patricio Andrés Robles Contreras, se adhiere a la acusación fiscal.

A fojas 438 y siguientes, el abogado defensor don Claudio Peñailillo Farías, en representación del acusado, Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, en lo principal de su presentación contesta acusación fiscal y adhesión a la misma, por el primer otrosí renuncia al término probatorio; y por el segundo otrosí, en la eventualidad de ser condenado su representado, solicita se le otorgue alguna de las penas sustitutivas a la de privación de libertad que contempla la ley 18.216.

A fojas 445 se concede traslado a la parte querellante respecto de la renuncia al término probatorio de la defensa, el cual es evacuado a fojas 457, y en cuyo mérito se resuelve a fojas 458 prescindir del término probatorio.

A fojas 452, el abogado defensor don Claudio Peñailillo Farías solicita medida para mejor resolver.

A fojas 458, se decreta una medida para mejor resolver, la que se cumplió según consta de resolución que obra en fojas 466.

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos para fallo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tras ser acusado Enrique Erasmo Sandoval Arancibia como autor de los delitos reiterados de aplicación de tormentos en la persona de Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena, cometidos durante varios días a contar del 16 de abril de ese año, el abogado querellante Patricio Andrés Robles Contreras, se adhiere a la acusación fiscal en representación de la víctima, por los ilícitos señalados, en los mismos términos en que ésta fue propuesta.

SEGUNDO: Que, a fin de acreditar la existencia de los hechos punibles materia de la acusación judicial y adhesión a ella, se allegaron a estos autos, los siguientes elementos de convicción:

1.- Querella criminal de fojas 9 y siguientes, presentada el 14 de mayo de 2019, por los abogados Manuel Adolfo Montiel Gómez y Patricio Andrés Robles Contreras, en virtud de la cual sostienen que la señora Arinda Ojeda Aravena fue detenida por agentes de la Central Nacional de Informaciones el 16 de abril de 1981, a escasos metros de su vivienda, en aquel entonces ubicada en calle Alcázar N° 101, Penco. Una vez aprehendida, fue privada del sentido de la vista, subida a un furgón, agredida con golpes de puño en la cara y en los pechos, mientras era interrogada sobre otros moradores en el inmueble. Percutan en dos ocasiones un arma de fuego descargada como simulación de fusilamiento; luego trasladada a un sitio subterráneo con paredes de cemento (aparentemente “El Morro” de Talcahuano), lugar donde fue sometida a diversos interrogatorios, desnuda, amarrada a un catre metálico donde se le aplicó descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo: genitales, senos y nariz. Durante la segunda noche fue sacada y llevada en un viaje más largo a un tipo de celda con ventanilla y puerta de metal (aparentemente “Cuartel Borgoño” en Santiago), lugar donde también fue interrogada mediante torturas de “la parrilla”, además le aplicaron golpes a mano abierta en ambos oídos, mejillas y cabeza (“el teléfono”) mediando amenazas con que miembros de su familia sufrirían similares rigores y/o que le sacarían a algún lugar para hacerla estallar mediante explosivos.

Transcurridos unos días, el 05 de mayo de 1981, se le quitó la privación del sentido de la vista, percatándose en ese momento que estaba en la ciudad de Santiago, cuando era llevada a la Fiscalía militar a declarar, momento en que se le abrió una causa formal por delitos sobre ley de control de armas e ingreso clandestino al país.

Luego, mediante DS N° 787, de fecha 18 de julio de 1989 se le redujo la condena impuesta dado el término del exilio que pesaba en su contra.

2.- Documentos acompañados a la querella criminal incoada, consistentes en:

a) Copia del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, donde aparece con el N° 17.053 la querellante Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena, como víctima reconocida por la Comisión Valech;

b) Copia del Decreto Supremo N° 787 de fecha 18 de julio de 1989 que reconoce la reducción de pena impuesta por delito de ingreso clandestino al país, indicando: *“Redúcense en 15 años 1 día las penas principales a que se encuentra condenada Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena (...) causa Rol N° 332-81 del Tercer Juzgado Militar de concepción”*;

c) Copia del certificado suscrito por el Centro de Readaptación Social de Coronel, de Gendarmería de Chile, de fecha 08 de noviembre de 1989 donde se detalla la situación prontuarial de la víctima dados los cargos levantados por la dictadura cívico militar en su contra;

d) Copia de ficha de Colonia Dignidad, con recortes de prensa relativos a la infrascrita, donde indica *“no puede ingresar a Chile”*. Los recortes de diario son de El Sur de 15-09-1984; La Tercera 06-05-1981; El Sur 06-05-1981; El Mercurio 11-09-1984. Indica además *“detenida el 16-04-1981;*

e) Copia simple de anexo N° 2, de fecha 05 de mayo de 1981, en cuya virtud la querellante denuncia ante la Fiscalía Militar de Santiago las torturas sufridas desde el momento mismo de la detención, indicando *“A su pregunta desde el día 16 de abril hasta la fecha estuve detenida en la CNI, recibí los siguientes apremios: aplicación reiterada de corriente eléctrica en todo el cuerpo,*

especialmente en los genitales, interrogatorios estando completamente desnuda y además ciertas violencias sexuales sin llegar a la violación, como por ejemplo, tirones violentos de los pezones, golpes violentos en la cabeza y oídos. Además hubo presiones de tipo psicológicos como el fantasma de hacerme desaparecer, ya que por el hecho de haber entrado ilegalmente al país ‘no existíamos’ y que así se puede ‘hacer y deshacer’ con nosotros”;

f) Copia simple de anexo N° 3 de fecha 23 de junio de 1983, donde consta el sobreseimiento temporal de los agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) “Roberto Hernán Fuenzalida Palma”, “Raúl Inostroza Ortega”, “Emerson Quilodrán Andrades” y “Orlando Rojas Martínez” del delito de violencias innecesarias en contra de Juan Medrano Bustos y Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena;

3.- Causa tenida a la vista, Rol N° 332-1981, cuya recepción consta a fojas 31, remitida por el III Juzgado Militar de Valdivia, y en que obran las siguientes piezas, en lo que es pertinente a la presente investigación:

a) Oficio N° 210540 de fecha 05 de mayo de 1981, del Director Nacional de Informaciones al Sr. Fiscal Primera Fiscalía Militar de Santiago, que rola a fojas 1 del expediente, del que se lee: *“se pone a disposición de US a las personas que se individualizan a continuación, las que fueron detenidas y mantenidas en esa calidad en dependencias de esta Central Nacional de Informaciones, en cumplimiento a los Decretos Exentos de Arresto señalados en la referencia. Estas personas fueron detenidas por personal de esta Alta repartición, el día 16 de abril de 1981 en la VIII región, lugar hasta donde se llegó en la investigación de los delitos que más adelante se mencionan”*. Y luego comienza a individualizar a los detenidos, entre ellos, *“Juan Medardo Bustos Troncoso, Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena, Juan Simplicio Sandoval Torres, María Soledad Moyano Cárdenas, Marcos Vinicio Eucarpio Vargas Méndez, Marcela Lavinia Escribano Veloso, y Marco Antonio Ríos Ramírez”*. Indicando a continuación los delitos de los que se les acusaba con sindicación que *“Todos ellos pertenecen a la Estructura Militar del Regional*

Concepción del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) cuya misión principal era la perpetración de actos terroristas en esa Región del país”.

b) Acta de allanamiento de fecha 16 de abril de 1981, que rola a fojas 30, y da cuenta del allanamiento al inmueble ubicado en calle Alcázar 101, Penco. Indica que el allanamiento se llevó a cabo a las 14.30 horas. Firma del encargado se lee **“R. Fuenzalida”**.

c) Acta de incautación realizado el 16 de abril de 1981, en propiedad calle Alcázar N° 101, Penco, en que constan especies incautadas, que rola a fojas 31 y siguientes. Firma Comandante de Unidad **“R. Fuenzalida”**.

d) Certificado que rola a fojas 35, del que se lee: *“Certifico que mientras permanecí detenida en la Central Nacional de Informaciones (CNI), desde el día jueves 16 de abril de 1981, hasta esta fecha, no recibí apremios físicos ni presión de ninguna índole. Además declarado haber recibido mis pertenencias personales y documentación conforme. De lo cual dejo constancia en forma libre y espontánea y firmo. Santiago, 05 de mayo de 1981. Firma Arinda Graciela del C. Ojeda Aravena.*

e) Declaración judicial de fecha 5 de mayo de 1981, prestada por la víctima Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena ante el Fiscal Militar, que rola a fojas 92 y siguientes en la que indica: *“Respecto a mi declaración Extrajudicial prestada ante funcionarios de la CNI puedo decir a Su Señoría que no la conozco, la firmé con la vista vendada.(...)”*

A su pregunta, desde el día 16 de abril hasta la fecha estuve detenida en la CNI. Durante ese lapso recibí los siguientes apremios: aplicación reiterada de corriente eléctrica en todo el cuerpo, especialmente en los genitales; interrogatorios estando completamente desnuda, y además ciertas violencias sexuales sin llegar a la violación, como por ejemplo: tirones violentos de los pezones, golpes violentos en la cabeza, oídos. Además hubo presiones de tipo psicológicos como el fantasma de hacerme

“desaparecer”, que por el hecho de haber entrado ilegalmente al país “no existimos” y que así se puede “hacer y deshacer” con nosotros”.

f) Resolución de fecha 05 de mayo de 1981, que obra a fojas 101, por la cual, se ordena el ingreso de Arinda Ojeda Aravena, María Soledad Moyano Cárdenas y Marcela Escribano al Centro de Orientación Femenino (COF) de Santiago.

g) Declaración judicial prestada con fecha 06 de mayo de 1981, por el agente CNI “Roberto Hernán Fuenzalida Palma” ante el Fiscal Militar, que rola a fojas 106 y siguientes, quien señala en lo pertinente: *“Conozco el motivo de mi comparecencia. Es por la detención de siete individuos integrantes del Grupo Militar de Combate MIR, regional Concepción.(...)”*

El mismo día 16 de abril último, se procedió a la detención de Arinda Ojeda, en la vía pública, a pocos metros de su domicilio en Alcázar N° 101, en la ciudad de Penco. Como señalé anteriormente, al momento de su detención Arinda Ojeda portaba cédula de identidad falsa a nombre de Isabel Moore Jorquera. La detenida no opuso resistencia. Inmediatamente después de su detención, se practicó un allanamiento a su domicilio (...).”

h) Declaración judicial prestada con fecha 07 de mayo de 1981, por el agente “Raúl Inostroza Ortega”, ante el Fiscal Militar, rolante a fojas 109, indicando que: *“Conozco el motivo de mi comparecencia. Es por la detención de siete sujetos integrantes de la estructura militar del MIR Regional Concepción, denominada “Base Madre” o “Comando José Miguel Carrera. (...) dio por resultado la detención de las siguientes personas: (...) Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena.*

Ratifico íntegramente el parte de la Central Nacional de Informaciones de fecha 05 de los corrientes que rola a fojas 1”.

i) Resolución de fecha 9 de mayo de 1981, que rola a fojas 137 en virtud de la cual se encarga reo y somete a proceso a Juan Medardo Bustos Troncoso, Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena (...), quienes quedarán sujetos al régimen de prisión preventiva, en calidad de incomunicados, en los Centros en que actualmente se encuentran reclusos”.

4.- Carta Respuesta de la Vicaría de la Solidaridad, que rola a fojas 32, y documentos adjuntos consistentes en:

a) Piezas del recurso de amparo interpuesto en favor de doña Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena; entre los cuales consta el Decreto Exento N° 3065, del Ministerio del Interior, de fecha 21 de abril de 1981, que indica *“Modifícase el Decreto Exento N° 3054, de 16 de abril del año en curso que dispuso el arresto de diversas personas en dependencias de la Central Nacional de Informaciones, en los términos que a continuación se señalan: (...) c) declárese que la medida de arresto ordenada contra Isabel Angélica del Carmen Moore Jorquera, deberá entenderse aplicable a Arinda Graciela Ojeda Aravena, verdadera identidad de aquella (...)”*.

b) Recorte de prensa que informa recursos de amparo interpuesto por el Departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepción, en favor de personas detenidas, entre las que se encuentra Arinda Ojeda Aravena, Recurso Rol N° 4813;

c) Denuncia presentada ante la Fiscalía Militar de Concepción por la detención de Marcela Escribano Veloso y otros, entre los que se encuentra Arinda del Carmen Ojeda Aravena, por parte de agentes de la CNI, y en que se indica: *“El 16 de abril del actual, personas de civil armadas, que afirmaron reiteradamente pertenecer a la Central Nacional de Informaciones, y que no dieron cumplimiento a ninguna de las normas constitucionales establecidas en el N° 7 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, en vigencia desde el 11 de marzo último, para garantizar el Derecho a la Libertad Personal y a la Seguridad Individual, procedieron a detener en distintos lugares y a diversas horas, a las siguientes personas: 1. Marcela Escribano Veloso, 2. María Soledad Moyano Cárdenas, 3. Arinda del Carmen Ojeda Aravena, 4. Marcos Antonio Ríos Ramírez, 5. Marcos Vinicio Vargas Méndez, y 6. Juan Sandoval Torres. Desde la fecha de sus aprehensiones, todos los detenidos se encuentran incomunicados en dependencias secretas de la CNI que no son lugares públicos destinados a servir de casas de prisión o de detención;*

d) Informe Confidencial Arzobispado de Santiago - Vicaría de la Solidaridad, abril de 1981, que informa de personas detenidas en la ciudad de Concepción, entre las que se encuentra Arinda del Carmen Ojeda Aravena, en el que se indica: *“El día 18 de abril fueron trasladados a Santiago en avión María Soledad Moyano Cárdenas, Arinda del Carmen Ojeda, Marcos Vargas Méndez, Juan Sandoval y Juan Bustos. Una semana después fueron seguidos por Marcela Escribano y Marco Ríos Ramírez. Todos ellos quedaron en la capital en poder de la CNI”* ;

e) Sentencia dictada en causa Rol 332-81, de la Fiscalía Militar de Concepción, seguida en contra de Juan Medardo Bustos Troncoso y otros, entre los que se encuentra Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena, que en lo pertinente indica: *“Se condena a Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo y a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autores del delito contemplado en el artículo 8° inciso 1° de la Ley N° 17.798”* Luego indica *“les servirán de abono a los reos (...) Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena (...) los dos mil veintinueve (2029) días que han permanecido ininterrumpidamente privados de libertad por esta causa, entre el dieciséis de abril de mil novecientos ochenta y uno (...)”*.

f) Informe Mensual Arzobispado de Santiago - Vicaría de la Solidaridad de septiembre de 1988, en que informa de la situación que afecta a Arinda Ojeda Aravena

5.- Informe del Servicio Médico Legal de fecha 09 de julio de 2019, que contiene evaluación psicológica de la víctima Arinda Ojeda Aravena de acuerdo al Protocolo de Estambul, que rola a fojas 119, que indica en sus conclusiones *“De acuerdo a la evaluación psicológico-forense realizada, es posible concluir que doña Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena: presentó sintomatología concordante con un trastorno de Estrés Post Traumático, posterior a un hecho traumático, caracterizado por síntomas como, persistencia*

de la reexperimentación del trauma, evitación e hiperexcitabilidad, durante un periodo largo de tiempo, que ha afectado la forma de relacionarse con su entorno. Si bien la examinada cuenta con recursos cognitivos, afectivos y emocionales que le han permitido retomar la vida personal y con su hijo, persisten síntomas como una mayor hipervigilancia y pensamientos, emociones y sensaciones que actúan como disparadores emocionales y que frente a cualquier situación inesperada pueden desencadenar recuerdos del trauma. El impacto emocional de la experiencia vivenciada, constituye lesiones psicológicas imborrables para su aparato psíquico”.

6.- Copia de carpeta de calificación ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presentada por la querellante a través de su abogado, que rola a fojas 125 y siguientes de autos, donde se consigna en cuanto a los antecedentes de tortura, que estas se produjeron en el Fuerte El Morro de Talcahuano desde el 16 al 18 de abril de 1981, y en el Cuartel Borgoño Santiago, desde el 19 de abril al 06 de mayo de 1981, de parte de la CNI; y se describen como efectos invalidantes de la tortura: *“daño integral en mi proyecto de vida, costo familiar muy alto: dejó a su único hijo de 9 años en Cuba, y volvió a verlo a los 19 años; se separó de su marido”.* Esto tras estar privada de libertad por un lapso de 8 años, 4 meses y 5 días, desde el 16 de abril de 1981 hasta el 21 de agosto de 1989.

7.- Declaración judicial de la víctima doña Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena, de fecha 17 de julio de 2019, que rola a fojas 137, en que relata: *“yo militaba en el MIR desde antes del Golpe Militar. Tenía a la sazón, 28 años de edad. Soy químico analista de profesión (...) Tras acontecido el golpe me exoneraron de ambos trabajos. Eso no era todo, sino que había que estar arrancando de los agentes de Estado. (...) A fines del año 1973, me voy a Santiago y me asilo en la Embajada de Italia, primero sola, luego me traen a mi hijo. salgo del país a través de las gestiones realizadas por el CIME (Comité Intergubernamental de Migraciones Europeas) rumbo a Italia, país que me otorga la calidad de “refugiada política”, en realidad a toda la familia.*

Vivimos en Italia con mi hijo y mi marido alrededor de tres años y medio y luego nos fuimos a Cuba. Ya era el año 1976. (...) Salí de Cuba a fines de 1979, y entré a Chile en febrero de 1980. Ingresé al país en forma ilegal ya que lo hice con documentación, pasaporte y cédula de identidad y nombre falsa "Carmen Julia Gutiérrez Muñoz", por el aeropuerto de Pudahuel. Mi hijo quedó en Cuba. En el año 1990 vino a Chile conmigo. Cuando volvía a Chile tuve que hacerlo con otro nombre, ya que por haber salido del país por la vía del asilo, no podía ingresar al país de vuelta. Existía el decreto N° 81, del 1973, que disponía que las personas que ingresaban al país bajo otro nombre, vale decir, en forma ilegal, lo hacían con la finalidad de atentar contra la seguridad del Estado y el Gobierno Militar de la época. Pero eso lo supe después, cuando ya estaba privada de libertad.

Al ingresar, me voy a vivir a la ciudad de Penco, Alcázar 101, casa arrendada. Nosotros veníamos a organizar resistencia, pensando que había alguna base acá para hacerlo, sin embargo, nos encontramos con que estaba todo desarticulado en esta región. (...)

Me correspondió trabajar junto a otros compañeros: Juan Bustos Troncoso, y Juan Sandoval Torres, con quienes conformábamos una base madre, trabajábamos con un enlace en Santiago de quien nunca supe su nombre y que no cayó detenido con nosotros. Nos dedicábamos a la búsqueda y organización de personas.

En el año 1981, el 16 de abril, fui tomada prisionera, en las circunstancias que relataré. Ese día, era un jueves de semana santa, cerca de las 10 de la mañana, salgo de mi casa, doy vuelta la esquina y cuando voy caminando me toman por la espalda y quedo en vilo. Yo portaba un bolso con una correa de cuero, tiran el bolso y se rompe al correa. En ese instante se acerca un furgón utilitario, abren la puerta y me tiran dentro de él. Alcanzo a ver que el furgón tenía cortinas. De inmediato me tapan la vista y me esposan con las manos en la espalda.

Uno de mis captores me abofetea, y me pregunta si hay alguien en mi casa. Insisten en ello, sin embargo yo vivía sola en esa casa. Por los sonidos siento que hay gente circulando por lo que presume

que estaban haciendo un operativo para entrar a la casa. De hecho, la allanaron, según supe por mi madre que a los días después intentó recuperar mis cosas, pero se encontró con la casa desvalijada. Solo rescató un living, una cama y otros utensilios. Las cosas de valor no fueron recuperadas.

Cuando el tipo me abofetea, yo lo intenté morder, no se si lo logré, pero después este sujeto me la cobró muy cara en el ámbito de las torturas. Me pegaron muchas veces en el pecho, quitándome la respiración.

Después de un tiempo, el furgón se pone en marcha, y me llevan a un lugar que está al aire libre, en un cerro. Me bajan, se escucha el ruido de los árboles, y se siente el aroma del mar. Me hacen “ruleta rusa”, que consistía en ponerme un arma de fuego en la sien, y decirme “hasta aquí nomás llegaste”, con garabatos correspondientes, y percuten el arma sin que salga tiro. Repiten esta acción dos veces. Luego me suben nuevamente al furgón, bajan el cerro y me doy cuenta que vamos circulando por calles.

Llegamos a otro lugar que mucho después me enteré que era el Fuerte El Morro, allí estuve dos días. En este lugar fui torturada, conocí por primera vez lo que se llama “la parrilla”. Al llegar al lugar, me preguntaba yo qué pasó con mis compañeros, Bustos y Sandoval. Allí nos ponían una venda que permite ver hacia abajo por el ángulo de la nariz, allí pude reconocer a Simplicio Sandoval, por los zapatos. Luego escuché un grito y pude reconocer la voz de Bustos. Así entonces, pude concluir que habíamos caído los tres.

En ese lugar me tomaron huellas dactilares. Me sometieron a múltiples torturas consistentes en subirme a la parrilla, esto es, que me pusieron desnuda en un catre metálico, con los brazos y piernas amarrados a los lados, y un almohadón en la boca, para acallar los gritos, me aplicaban corriente eléctrica con diversas intensidades para probar la resistencia de la persona.

Intercalaban las salidas a los interrogatorios con la reclusión en unos cuartos o módulos de concreto pequeños, no eran cerrados. A

uno la dejaban sentada, esposada con los brazos a la espalda, de cara a una pared.

En concreto, en El Morro, la tortura consistió en parrilla y golpes, porque yo tuve la mala ocurrencia de no decir mi nombre verdadero, por eso era que me preguntaban con mucha insistencia por mi nombre y se intensificaban las torturas, seguramente lograron saber mi nombre verdadero una vez que tuvieron el resultado de las huellas que me tomaron.

A la segunda noche me sacan de ese lugar, y yo deduzco que no iba en buenas condiciones producto de la torturas. Sentí el mal olor de la isla Rocuant. Me llevaban en un auto, luego me trasladaron a otro vehículo, no sé de qué tipo, sentía que vibraba solamente. Me ponen en uno de los asientos, siempre esposada. Y un tipo me llevaba agarrada desde el asiento del lado, y me decía “te vamos a tirar para abajo”. Yo no sabía en qué íbamos (lo cierto es que íbamos en una avioneta, pero eso lo supe después), solo sentía un enjambre de abejas en mi cabeza de modo que las amenazas de lanzarme abajo, me eran indiferentes, no alcanzaba a procesar las ideas. Después de un rato, me bajaron de la avioneta y me pusieron en un vehículo.

Llegamos a un lugar donde nos bajaron a un subterráneo, allí nuevamente me tomaron huellas, me sacaron la ropa y me obligaron a ponerme un mameluco enorme con cierre, y unas zapatillas tipo chancletas. También nos pusieron un antifaz que queda pegada a la piel, de modo que ya no se podía ver nada.

En ese lugar, me derivaron a una celda sola, de puerta metálica, con una ventana en un extremo que se abría por fuera. Había allí un camastro de cemento, sin frazadas, ni nada. Las paredes estaban pintadas con óleo, lisas y brillantes. Esto lo digo porque lo pude apreciar cuando me levantaba el antifaz cuando me dejaban sola en esa celda.

Desde esa celda, me llevaban a otra habitación donde estaba la parrilla. Aquí noté que los métodos de tortura eran más profesionales, desde que me amarraban no solo de los brazos y piernas sino también a la altura del abdomen, con un cinturón grueso que nos sostenía al

catre, esto porque con la corriente eléctrica el cuerpo se arquea. Me ponían los electrodos en distintas partes del cuerpo, en los pezones, en la vagina, incluso introduciéndolos en todo lo que fueran orificios del cuerpo. Y luego aplicaban la corriente con mucha intensidad. Aquí aparece el sujeto al que intenté morder cuando me detuvieron, me toma desde los vellos del pubis y me levanta con mucha fuerza, me dice cosas como “así que te las dabas de valiente”. Me hizo sangrar. Nunca supe su identidad, porque además ellos se nombraban por apodos. No era una sola persona la que estaba en la tortura, eran varios y sus voces se confunden.

En este lugar aparece ahora la figura de un médico que viene a verificar si la persona puede seguir siendo torturada. Puesto que llega un punto en que producto de la corriente que se aplica, uno se desvanece. De modo que recuerdo haber perdido la conciencia, y una voz que decía “déjenla descansar” y los sujetos se referían a él como “doc”.

En diversas ocasiones me sometieron a la tortura del teléfono, que consistía en que mientras me estaba sentada amarrada a una silla, me golpeaban a los costados de la cara, e iban contando hasta 30 golpes para cambiarse de torturadores y seguir dándome. Eso tuvo un efecto posterior, que es que, se me produjo una lesión en la articulación témporo maxilar, y esa lesión como no fue curada por largos años, finalmente me produjo una artrosis irrecuperable, unida a falta de piezas dentales, que se cayeron producto de los golpes. A la larga no podía mascar, debía consumir solo líquidos. Eso me afectó bastante, porque era el recuerdo permanente de las torturas a las que fui sometida. Después del trabajo de la Comisión Valech, salió una ley a la que me acogí y que en su artículo 10 contemplaba la posibilidad de iniciar un tratamiento de recuperación para tratar las secuelas de la tortura. En mi caso, fue un tratamiento con recuperación de piezas dentarias, y estabilización de la mandíbula, para poder comer con normalidad. La artrosis es irrecuperable. Debo usar plano de relajación para dormir y algún medicamento para el dolor cuando se producen

crisis. Estos efectos son los más evidentes, porque los otros son a nivel emocional.

A través del Programa PRAIS, recibo atención psiquiátrica y psicológica desde su institución. Antes de ello, la Vicaría de la Solidaridad, me otorgó asistencia médica a través de la doctora Marina Casanova, aquí en Concepción.

En el cuartel Borgoño, los torturadores hacían un juego que denominaban “gallinita ciega”, donde mientras a uno lo mantenían vendado, ellos se posicionaban en círculo y nos arrojaban de uno a otro, empujándonos. A veces nos dejaban caer. Todo esto por supuesto, iba dejando huellas físicas, como hematomas, sangramientos, moretones.

Otra cosa eran “la ducha”, que era un cubículo que tenía espejos por todos lados, ellos desde afuera veían hacia adentro. Ellos contaban hasta un cierto número y me sacaban sorpresivamente hacia afuera, mojada como estuviera, mientras uno trataba de ponerse el mameluco. Yo tenía el pelo largo en aquella época de manera que pasaba muchos días con el pelo mojado. Esto significó que se me inflamara la garganta, con mucha fiebre, considerando además, los gritos ahogados por el almohadón producto de la tortura en la parrilla.

Otra técnica que utilizaban, eran formas de castigo, por ejemplo, dejarte en cuclillas por mucho rato, o con los brazos hacia adelante, o hacia arriba, en alguna posición incómoda que era difícil de sostener por mucho tiempo. Había gente mirando y si uno bajaba los brazos o cambiaba la posición venía el castigo físico.

Otra forma de tortura era la amenaza constante de hacernos desaparecer, me decían “tu no existes aquí, ya que llegaste con otro nombre”.

Me amenazaron, asimismo, con atentar contra mi hijo, me dijeron “nosotros podemos hacer lo que queramos en cualquier parte del mundo” y recordaban el atentado contra Bernardo Leighton en Italia. Ellos creían que mi hijo estaba en Italia, y yo jamás dije que no era así. Me mostraban una fotografía que yo tenía en mi casa, escondida, donde aparece mi niño pequeño aun, durmiendo. Este

hecho era tremendamente violento para mí, porque estando amarrada no podía quitárselas. Me levantaban el antifaz para que viera la fotografía.

Estuve 18 días en el Cuartel Borgoño. Se que pasé allí un 01 de mayo porque se notó el ajetreo y cuando me llevaban al baño o a la parrilla había que pasar entremedio de mucha gente que estaba en el suelo.

Después de ese evento empieza a disminuir la violencia física, y después de eso, nos hacen poner nuestra ropa, y puedo notar que somos varios porque vamos en fila y nos indican poner la mano en el hombro del que va delante; nos llevan a una sala donde se nota que hay más gente. Nos sitúan alrededor de una mesa, y ahí nos hacen sacarnos el antifaz, y prenden unos focos que nos encandilan. No pudimos ver nada. La mesa estaba llena de cosas tales como armas de todo tipo, elementos de sanidad como botiquín, entre otras cosas. Allí nos filmaron. Se escuchó que los tipos que estaban ahí manipulaban sus armas pasando bala. No se cuánto duró eso. Nos hicieron volver a la celda y ponernos nuevamente el mameluco.

Luego de eso, vino un chequeo médico, que consistió en llegar a un box médico donde había una camilla, donde un sujeto de bata blanca y fonendoscopio, al que pretendí decirle algo, me dijo "cállate, estás bien" y firmó un papel.

Seguidamente, llegan a la celda dos o tres tipos con un montón de papeles que me obligan a firmar mientras permanecía vendada por lo que desconozco el contenido de dichos documentos.

Luego de eso, me hacen vestir con mi ropa. Me ponen scotch en los ojos, y unas gafas, y me sacan. Me ponen en un auto que además del chofer va un tipo conmigo que me abraza para sujetarme y me dice "aquí vamos pololeando". Al estacionar el vehículo, el sujeto me dice "cuidadito con lo que dices, porque si no, volvemos". Y ahí me hacen bajar, me sacan el scotch que sale con pestañas y cejas. Yo voy esposada, el tipo atrás me va guiando. Me doy cuenta que estoy en la Plaza de la Constitución, en Santiago. Fue un golpe para mí, porque

hasta ese momento, no me había dado cuenta que había salido de Concepción. Llegué a la Fiscalía Militar. En ese lugar veo a Bustos y Sandoval, junto a otras dos personas que no conocía en ese momento, varones, que después aparecieron en mi proceso, seguido ante la justicia militar, y también dos mujeres que tampoco conocía en ese momento. Estuvimos presas largos años juntas, por el mismo proceso. Es la causa Rol 332-81 de la Fiscalía Militar de Concepción que siguió este proceso ya que la de Santiago se declaró incompetente.

Durante la declaración que nos tomaron en la Fiscalía, permanecían agentes detrás nuestro, que eran de la CNI. Aún así, me atreví a decirle al Fiscal que había sido torturada y que las declaraciones contenidas en los documentos que aportó la CNI las había firmado mientras estaba vendada. No me atreví a decir mucho más por el miedo de volver a lugar del que me habían sacado y donde me habían torturado. Presté declaración ante el Fiscal.

De amanecida nos llevaron al COF de Santiago, incomunicadas. Nos llevaron a las tres mujeres: María Soledad Moyano Cárdenas y Marcela Lavinia Escribano Veloso.

En algún momento nos sacaron de allí y nos llevaron a la Fiscalía para prolongarnos la incomunicación por cinco días más. Terminado ese periodo nos trasladaron a Concepción, en un operativo conjunto entre CNI y Gendarmería, donde venían dos carros celulares en uno venían los hombres, en otro las mujeres. A mitad de camino cambiaban autos por lo que podíamos ver a través de las ventanitas de los vehículos.

Llegamos a la cárcel pública donde los hombres se bajaron. Luego a las mujeres nos condujeron al COF que ese tiempo estaba en Camilo Henríquez con Lientur. En realidad se trataba del convento de las monjas del Buen Pastor, en una de sus dependencias estaba la cárcel de mujeres. Estuve allí desde el 17 de mayo de 1981 hasta el 23 de agosto de 1984, fecha en que nos trasladan a Coronel. Esta

fecha es muy importante porque ese día tuvo lugar la matanza de la operación “Alfa Carbón”, donde matan en La Vega Monumental a Nelson Herrera, a Luciano Aedo en Hualpén, y a Mario Mujica en Los Ángeles. En Valdivia mataron a José Bomcompte. Estuve presa con las mujeres de los que mataron en esa oportunidad, me refiero a Patricia Zalaquet, que era la pareja de Nelson Herrera, y María Cristina Chacaltana, quien era la esposa de Mario Mujica.

Estuve en la cárcel de Coronel hasta el 21 de agosto de 1989, fecha en la que recupero mi libertad. En este punto quiero señalar que a esa data, se terminó el exilio, el Gobierno dictó un Decreto permitiendo el regreso de miles de compatriotas al país, lo que significó en mi caso, que se dictara un indulto rebajándome 15 años de los 21 a los que había sido condenada, de manera que debía cumplir sólo seis años y medio, y como llevaba 8 años privada de libertad, la condena la tenía cumplida.

Respecto de mis torturadores, puedo señalar a su señoría, que tengo algunos documentos provenientes de mi proceso en la Fiscalía Militar, entre ellos, una resolución que sobresee temporalmente a cuatro sujetos, cuyos nombres son: Raúl Inostroza Ortega, Emerson Quilodrán Andrades, Orlando Rojas Martínez y Roberto Hernán Fuenzalida Palma. Estas son sus chapas, según descubrí años después tras buscar información en distintos medios. Fue así como descubrí que la chapa Roberto Hernán Fuenzalida Palma corresponde al agente Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, porque apareció en un diario, el reporte de una funa que le hicieron a esta persona en Providencia, y allí apareció junto a su nombre, la chapa que yo conocía. Luego lo corroboré en bancos de datos de algunos organismos internacionales. Posteriormente ese mismo nombre lo encontré entre los agentes involucrados en la muerte de Lisandro Sandoval Torres, en agosto de 1981. Yo aportaré antecedentes del fallo dictado en causa Rol 2.182-1998. No sé quién dictó el fallo, pero aportaré una copia.

En el sobreseimiento temporal a que hago referencia, se señala que se sobresee la investigación por las presuntas torturas de mi persona y de Juan Bustos Troncoso. Eso debe estar en el proceso seguido ante la Justicia Militar, causa rol 332-81.

8.- Informe Policial N° 1301, de fecha 06 de agosto de 2019, proveniente de la Brigada de Homicidios de Concepción, que rola a fojas 145 y siguientes, en virtud del cual se acompaña orden de investigar diligenciada, con declaraciones policiales de:

a) Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena, en la que relata las circunstancias de su detención indicando: *“En ese momento me tomaron por detrás, me agarraron de los brazos, vendándome los ojos y subiéndome a un vehículo. Recuerdo que fueron al menos dos personas quienes me tomaron y me subieron al vehículo que iba con un chofer. Además recuerdo que esto correspondió a un operativo ya que había más personas participando del mismo por lo que se alcanzaba a oír.*

Posteriormente fui llevada a algún lugar escampado, luego al Fuerte El Morro, en la comuna de Talcahuano, y por último al Cuartel Borgoño, en la ciudad de Santiago. En todos estos lugares fui sometida a apremios físicos y psicológicos, siempre con los ojos vendados. Esto fue durante 20 días.

Pasados estos 20 días fui trasladada a la Fiscalía Militar, ubicada en la ciudad de Santiago, específicamente en la Plaza de La Constitución en ese entonces. En ese lugar me tomaron declaración en presencia de gente de la CNI. Todo esto según información que he podido recabar en el tiempo, ya que en todo momento estaba con los ojos vendados, excepto en la Fiscalía Militar, donde recién me sacaron la venda y pude ver que había otros compañeros en mi misma situación, de los cuales recuerdo a Juan Bustos Troncoso, Juan Sandoval Torres, María Soledad Moyano Cárdenas y Marcos Ríos, y otros dos, que por lo que se están fuera de Chile y sería difícil ubicarlos.

También deseo señalar que previo al traslado desde el Cuartel Borgoño a la Fiscalía Militar me obligaron a firmar documentos, mientras yo permanecía con los ojos vendados, los cuales nunca supe de qué se trataban.

Finalmente fui trasladada al Centro de Orientación Femenina, en la ciudad de Santiago, lo que corresponde a la cárcel de mujeres, donde estuve 10 días incomunicada y posteriormente trasladada a la cárcel de mujeres de Concepción donde estuve hasta el día 23 de agosto de 1984, fecha en la que fui trasladada hasta la cárcel de hombres de Coronel, donde también había una sección de mujeres, permaneciendo ahí hasta el 21 de agosto de 1989, fecha en la cual soy puesta en libertad después de 8 años, 5 meses y 4 días.”

b) Declaración policial de Juan Simplicio Sandoval Torres, quien afirma que *“Fui cuñado de doña Arinda Ojeda Aravena, y al igual que ella, fui detenido el día 16 de abril de 1981, en las cercanías de un domicilio que arrendaba en Hualpencillo.*

Mi hermano mayor, de nombre Héctor Sandoval Torres, mantuvo una relación de tipo sentimental con Arinda, ellos estuvieron casados desde el año 1968 hasta el año 1980, de cuya relación tuvieron un hijo (...).

Respecto a mi detención debo indicar, como dije anteriormente, que ocurrió el día 16 de abril de 1981, a las 09.00 horas de la mañana (...) siendo trasladado inmediatamente al Fuerte El Morro, ubicado al lado del Estadio El Morro de Talcahuano, esto dado que cuando llegamos al lugar, la persona que me custodiaba me preguntó si sabía dónde estaba dado que tenía mi vista vendada. Se sentía el olor característico de Talcahuano, sentía el mar y las gaviotas, no le respondí y nos dice este lugar es el Morro, dándome a entender que habían traído a varias personas detenidas. Por un espacio de mi venda pude ver que había entre 80 a 130 personas detenidas en ese lugar (...) A eso de las 14 horas de ese día fui llevado a una pieza, donde había una litera de fierro, me pidieron que me desnudara y

luego me tendiera en la cama que era de fierro, fui amarrado a ese catre con alambre y luego comenzaron a aplicarme corriente en varias partes del cuerpo (se quiebra) en las partes más sensibles del cuerpo y en los genitales, recuerdo que era duro, un poco fuerte porque se me ponía tieso el cuerpo, ellos querían que les dijera mi nombre, pero yo me negué, luego me pedían nombre de otras personas, pero tampoco les dije nada. En un momento **me dijeron que estaba detenida la Arinda en ese mismo lugar** y que habían encontrado a mi hermano cerca de Lirquén, que probablemente estaba muerto porque le habían disparado y habían visto sangre, pero yo seguía sin decirles nada, y por lo tanto las torturas fueron más fuertes (...). Un compañero que también estaba detenido, de nombre Marcos Ríos Ramírez, que le correspondió ir a la parrilla después que yo, me comentó que mis torturadores estaban bastante enojados conmigo, dado que por la corriente tan fuerte que me aplicaron, defecué sobre el catre y tuvieron que limpiarlo ellos para seguir con el siguiente. (...)

Por un espacio de la venda **pude ver a la Arinda, la reconocí por sus zapatos claros**, y se los conocía por haberla visto con ellos con anterioridad. Además, una de las personas que nos custodiaba, **la llamó por su nombre Arinda Ojeda, cuando ella le respondió la reconocí por la voz.**

Al día siguiente a nuestra detención, en horas de la tarde, nos trasladaron a la ciudad de Santiago, para ello nos subieron a una camionera en la parte posterior, siempre vendado y con las manos atadas (...) luego nos subimos a una avioneta, escuché que supuestamente nos tirarían al mar (...). Sentí el ruido de la avioneta y luego la sensación del vuelo. (...)

Nos subieron a unas camionetas para ser luego trasladados al Cuartel Borgoño en la ciudad de Santiago, según supe después. (...) Durante los días que estuve en el Cuartel Borgoño, me desnudaron, me pusieron un overol y me mantuvieron en el cemento. Me sacaron como 2 veces a interrogatorio con aplicación de golpes y la tortura era más psicológica porque había un interrogador bueno y otro malo; el

*malo me amenazaba con violentar a la Arinda, y la Soledad Moyano, la primera era mi cuñada, y la segunda mi pareja, aunque nunca las vi porque seguía vendado, **las pude escuchar.** (...)*”.

c) Declaración policial de María Soledad Moyano Cárdenas, en la que indica *“El 16 de abril de 1981, en horas de la mañana, mientras me encontraba en mi domicilio particular ubicado en la población Hualpencillo, llegaron cerca de 10 personas vestidas de civiles, todos de sexo masculino, quienes portaban armamento, diciendo ser funcionarios de la CNI, quienes entraron a mi casa procediendo a detenerme, trasladándome al Fuerte El Morro de Talcahuano, donde permanecí detenida durante todo el día y la noche, posteriormente fui trasladada en avioneta junto a otras 5 personas hasta Santiago, específicamente a dependencias del Cuartel Borgoño de la Policía de Investigaciones, donde permanecí cerca de 20 días, luego fui llevada a la Fiscalía Militar de Santiago, y mientras esperaba para ser llamada por el fiscal a declarar, vi a doña Arinda Ojeda Aravena, quien también se encontraba en ese lugar a la espera de ser llamada (...)*

9.- Informe policial N° 4871, de fecha 14 de octubre de 2019, proveniente de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos, que rola a fojas 178 y siguientes y en virtud del cual se acompaña declaración policial obtenida del inculpado Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, quien señala en lo pertinente: *“para el mes de abril de 1981 me encontraba cumpliendo funciones en la Central Nacional de Informaciones CNI, desempeñándome como Jefe de la Agrupación Azul, encargada de controlar, y desarticular al Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR a nivel nacional, dicha agrupación la componían 20 funcionarios aproximadamente, de los cuales desconozco sus nombres verdaderos e instituciones de origen, toda vez que todos teníamos identidades operativas.*

Mi superior directo era el capitán de Ejército Álvaro Corbalán Castilla, quien a su vez dependía del coronel Roberto Schmied Sanzi, con jurisdicción a nivel de la Región Metropolitana.

Respecto de la víctima de la presenta causa de nombre Arinda Ojeda Aravena y de las circunstancias de su detención en la ciudad de

Penco, que me informan los Oficiales que me entrevista, debo manifestar que ella era miembro del MIR, en la ciudad de Concepción, razón por la cual en las vísperas de semana santa, viajé en cometido funcionario junto a la agrupación azul, con la finalidad de detener a los miembros que teníamos identificados, entre ellos Arinda, propiamente tal no participé de su detención, pues se realizó un operativo simultáneo en Concepción, el que culminó con 25 detenidos de los cuales 10 aproximadamente fueron trasladados vía aérea a Santiago, entre ellos Arinda Ojeda, siendo derivados posteriormente al cuartel Borgoño, lugar donde fueron interrogados con la finalidad de saber de armamento y explosivos.

En el caso de Arinda, en su casa fue encontrada documentación para volar torres de alta tensión. De ella me recuerdo bien, toda vez que un día sábado, mientras se encontraba detenida, le ofrecí un trozo de chocolate, e iniciamos una pequeña conversación distendida, donde me confesó que en su velador había un barretín donde tenía un arma de puño, esta información la proporcioné a la Brigada de Concepción, quienes luego de allanar su casa encontraron el arma.

La detención de Arinda se prolongó por 7 días, siendo en esa oportunidad entregada a los agentes de Concepción, quienes la pusieron a disposición de Tribunales”.

10.- Oficio N° 15.081, de fecha 16 de junio de 2020, proveniente de la Oficina de Exonerados Políticos, que rola a fojas 239, en el que acompañan Decreto Exento N° 160 en que consta que se reconoció la calidad de exonerada política a la víctima doña Arinda Graciela Ojeda Aravena.

11.- Informe Policial N° 913, de fecha 09 de marzo de 2011, proveniente de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, remitida por la Ministra en Visita Extraordinaria de San Miguel doña Marianela Cifuentes, en razón de obrar dicho informe en causa Rol N° 62-2010, el que rola a fojas 263 y siguientes, e incluye el organigrama de la Agrupación de la CNI encargada de la represión del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, con fotos de los

funcionarios en el mes de abril de 1981, y consigna que “*el Jefe de la Agrupación Rojo era Enrique Erasmo Sandoval Arancibia*”,

12.- Causa tenida a la vista, Rol N° 2182-1988 Episodio Lisandro Sandoval Torres sustanciada por el Ministro de Fuego don Alejandro Solís, cuya recepción consta a fojas 273 de autos, y en la cual obran las siguientes piezas como elementos de convicción:

a) Decreto Exento N° 3163, de fecha 26 de mayo de 1981, proveniente del Ministerio del Interior que rola a fojas 8, en el que indica: “*Arréstese y manténgase en tal calidad, en dependencias de Investigaciones de Chile a: (...) Lizandro (sic) Salvador Sandoval Torres*”

b) Copia del periódico Las Últimas Noticias, de fecha viernes 28 de agosto de 1981, bajo el titular “Arzobispado Protesta por la Muerte de Lisandro Sandoval”, que rola a fojas 10, en cuyo desarrollo indica: “*E) El 16 de abril último, a raíz de la detención de un hermano y una cuñada, retenidos en lugares secretos por más de veinte días, el hogar del señor Sandoval fue allanado sin orden judicial por elementos de la CNI (...)*”

c) Copia de carta dirigida al Sr. Arzobispo de Concepción, con fecha 25 de septiembre de 1981, firmada por Sergio Rillon Romaní, de la Oficina de Asuntos Especiales del Gobierno, República de Chile, que rola a fojas 33, y en la que se indica: “*Hasta abril del presente año, Lisandro Sandoval Torres, se desempeñó como Jefe de la principal banda subversiva que actuaba en la VIII región, la que estaba compuesta por: Marcela Lavinia Escribano Veloso, Marco Antonio Ríos Ramírez, María Soledad Moyano Cárdenas, Marcos Vargas Méndez, Juan Medardo Bustos Troncoso, **Arinda del Carmen Ojeda Aravena** y Juan Simplicio Sandoval Torres (hermano del delincuente subversivo abatido). Es del caso señalar que los cuatro últimos nombrados recibieron instrucción militar en Cuba y los tres últimos citados ingresaron, como parte de la Operación Retorno, subrepticamente al país. En la actualidad se encuentran procesados en la Fiscalía Militar de Concepción, tras ser detenidos el 16 de abril pasado por miembros de los servicios de Seguridad (...)*”

d) Copia del oficio N° 211230, de fecha 21 de agosto de 1981, proveniente del Director Nacional de Informaciones al Fiscal de la Primera Fiscalía Militar de Santiago, que rola a fojas 66, mediante el cual se informa sobre la muerte de extremista y remite especies que indica, y señala en lo pertinente: *“Hasta abril del presente año, Lisandro Sandoval Torres, se desempeñó como Jefe de la principal banda subversiva que actuaba en la VIII región, la que estaba compuesta por: Marcela Lavinia Escribano Veloso, Marco Antonio Ríos Ramírez, María Soledad Moyano Cárdenas, Marcos Vargas Méndez, Juan Medardo Bustos Troncoso, **Arinda del Carmen Ojeda Aravena** y Juan Simplicio Sandoval Torres (hermano del delincuente subversivo abatido). Es del caso señalar que los cuatro últimos nombrados recibieron instrucción militar en Cuba y los tres últimos citados ingresaron, como parte de la Operación Retorno, subrepticamente al país. En la actualidad se encuentran procesados en la Fiscalía Militar de Concepción, tras ser detenidos el 16 de abril pasado por miembros de los servicios de Seguridad (...)*”

e) Copia de la declaración judicial que consta a fojas 71, prestada por el agente de la CNI, que se identifica como “Roberto Hernán Fuenzalida Palma”, en que reconoce haber efectuado el disparo que hirió a Lisandro Sandoval Torres, heridas producto de las cuales muere en ese mismo acto, indicando *“como me encontraba más cerca de este y ante el fogonazo de su arma reaccioné utilizando mi revólver logrando impactarlo a una distancia de 7 metros. (...)”*.

f) Copia de la declaración judicial que obra a fojas 72, prestada por el agente de la CNI, que se identifica como “Juan Pablo Aguilera Espinoza”, en que reafirma la declaración del agente Fuenzalida Palma, indicando que *“Instintivamente nos agazapamos desenfundando nuestras armas de servicio respondiendo al fuego don Roberto que se encontraba más cerca del sujeto”*

g) Informe Policial N° 332, de fecha 02 de octubre de 2022, proveniente del Departamento V “Asuntos Internos” de la Policía de Investigaciones de Chile, que rola a fojas 102 y siguientes, y en que se indica que *“respecto a Juan Pablo Aguilera Espinoza, fue identificado*

como Víctor Manuel Molina Astete”; y continúa luego “respecto a Roberto Hernán Fuenzalida Palma, fue identificado como Enrique Erasmo Sandoval Arancibia”, y luego de individualizarlo indica que en uno de los acápites principales de su declaración señala: “como agente de la Central Nacional de Informaciones el año 1981, me desempeñé como Jefe de la Brigada Azul, ubicada en el Cuartel Borgoño. Se me proporcionó la identidad de Roberto Fuenzalida Palma, entregándoseme la identidad correspondiente a este nombre... en agosto de 1981, en horas de la tarde realizábamos un patrullaje en el sector donde está ubicado el metro Ecuador, este patrullaje consistía en el seguimiento de una persona con antecedentes de subversivo y terrorista al cual debíamos vigilar y seguir. Al intentar interceptar y detener a esta persona de nombre Lisandro Sandoval, sacó un arma y nos atacó (...)”

h) Recorte de prensa que rola a fojas 116, Diario La Tercera de fecha 20 de agosto de 1981 bajo el titular “Información oficial sobre muerte de extremista Lizandro Sandoval”, y señala *“Hasta abril del presente año, Lisandro Sandoval Torres se desempeñó como jefe de la principal banda subversiva que actuaba en la VIII región, que integraban entre otros: (...) Arinda del Carmen Ojeda Aravena (...).”*

i) Declaración judicial de Enrique Erasmo Sandoval Arancibia que rola a fojas 156, en que indica *“Es efectivo que en agosto de 1981 con el rango de Capitán me desempeñaba en la CNI y participé de un operativo que estaba destinado a detener un miembro del MIR llamado Lisandro Sandoval”.*

j) Declaración judicial de Víctor Manuel Molina Astete, que rola a fojas 162 y siguiente, en que indica *“se me entrega la chapa de Juan Pablo Aguilera Espinoza (...). El 17 de agosto de 1981 realicé un procedimiento donde resultó muerto una persona de nombre Lisandro Sandoval. Los hechos ocurrieron de la siguiente manera, el Capitán de apellido Sandoval, no recuerdo su nombre, me comunica que le había entregado el escalón superior una información, la que consistía que venía a Santiago desde Concepción un Mirista de la Comisión Política del MIR y que llegaría al sector de Estación Central (...) Debo decir*

que todas las decisiones las tomaba el Capitán, jamás nos preguntó nuestro parecer.”

k) Certificado de Servicios, proveniente del Estado Mayor del Ejército de Chile, que rola a fojas 169, correspondiente al Mayor ® Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, indicando que en *“1977 pasa a continuar sus servicios de planta al Comando en Jefe del Ejército. Comisión Extrainstitucional”*.

l) Informe policial N° 2434, de fecha 28 de julio de 2003, proveniente del Departamento V “ Asuntos Internos” de la Policía de Investigaciones de Chile, que rola a fojas 285, en el que consta que *“se puede concluir que los orígenes de la Brigada Azul, se produce el año 1981, a raíz de la fusión de las Brigadas Blanca y Roja, la que quedó al mando del Capitán Aquiles González. Se hace presente que una vez creada la Brigada Azul, la misión específica, era la **desarticulación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR**. Se informa que la Brigada Azul dependía jerárquicamente del Cuartel Borgoño o C.1. que a su vez esta repartición dependía de la División Antisubversiva que dependía de la División Metropolitana y esta a su vez de la Dirección Nacional.”*

m) Declaración judicial prestada por Aquiles Mauricio González Cortes, que rola a fojas 306, y que en lo pertinente señala: *“Puedo señalar que a la base del organigrama, y como grupo de organización más pequeño se encontraban las agrupaciones denominadas con colores, esto es, plomo sobre informaciones generales; rojo misión desarticulación MIR; blanco también abocado a la desarticulación del MIR; amarillo desarticulación del partido socialista; y verde, desarticulación del partido comunista. En enero de 1983 las agrupaciones blanco y rojo pasan a formar una sola agrupación **denominada azul, cuya unidad de trabajo era la desarticulación del MIR**. Me correspondió estar a cargo de esta última agrupación Azul en el año 1983. (...) Al año 1981, recuerdo que el **Jefe de Rojo era el Capitán Enrique Sandoval**. (...) Una vez determinado el material de inteligencia, este era derivado a la División Metropolitana*

por el escalón, esto es División Antisubversiva y luego División Metropolitana”.

n) Informe policial N° 1120, de fecha 02 de septiembre de 2003, proveniente de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la Policía de Investigaciones de Chile, que rola a fojas 315 y en el que se concluye: *“1. La Agrupación “Azul” no estaba creada en el año 1981, en ese entonces se llamaba agrupación Rojo. El Jefe de la agrupación Rojo era el señor Enrique Erasmo Sandoval Arancibia. Algunos de sus integrantes eran los señores Luis René Torres Méndez, Iván Quiroz Ruiz, Eduardo Fuenzalida Pérez, José Aravena, y otros sujetos apodados “El Choco” y “El Papito”. 2. Esta agrupación dependía directamente de la División Antisubversiva. 3. El encargado de esa unidad jerárquicamente superior era el Jefe del Cuartel Borgoño, señor Roberto Urbano Schmied Zanzi. 4. Esta Agrupación investigaba al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. 5. La conexión de esta agrupación con la División de Inteligencia Metropolitana y con el Director de la CNI de nombre Odlanier Mena, General de Ejército, era el señor Roberto Schmied Zanzi”.*

13.- Recurso de Amparo N° 4813-1981, deducido por Alicia Aravena Ávila en favor de Arinda del Carmen Ojeda Aravena, agregado a estos autos como consta a fojas 276 de autos, ordenándose formar cuaderno separado. Se encuentra incorporado a este recurso, el Decreto Exento N° 3065, del Ministerio del Interior, fechado en Santiago el **21 de abril de 1981**, que dispone, ampliar por el plazo máximo que establece la Constitución Política de la República, la medida de arresto que afecta a Marco Antonio Ríos Ramírez, Marcela Lavinia Escribano Veloso y Juan Bustos Troncoso. Y en cuanto a la amparada, el citado Decreto Exento establece: *“c) declárese que la medida de arresto ordenada contra Isabel Angélica del Carmen Moore Jorquera, deberá entenderse aplicable a Arinda Graciela Ojeda Aravena, verdadera identidad de aquella (...)”.* Cabe destacar que según se lee a fojas 1 de este libelo, la amparada había sido detenida el **16 de abril de 1981 en horas de la mañana**, en la

localidad de Penco, calle Alcázar N° 101, por un numeroso grupo de civiles armados, pertenecientes al parecer al Servicio de Inteligencia.

14.- Informe de Evaluación de Daño causado por Violaciones a los Derechos Humanos elaborado por el PRAIS respecto de la víctima doña Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena, que rola a fojas 278 y siguientes, en el que se incluyen observaciones tales como: *“Arinda recuerda con especial emotividad que durante las sesiones de tortura le mostraban fotos de su hijo, la amenazaban con ir a buscarlo en Italia y secuestrarlo” (...)* *“Durante los días transcurridos en el Fuerte El Morro y el Cuartel Borgoño la usuaria estuvo expuesta en forma sistemática a un estrés extremo, enfrentada a situaciones de amenaza permanente a su vida, con pérdida parcial del sentido de realidad y racionalidad frente al mundo, angustia severa y pánico. Es trasladada a la Cárcel de Mujeres de Concepción a mediados de mayo de 1981 en donde quedan en evidencia síntomas compatibles con trastorno de estrés post traumático como angustia, temor persistente a volver a ser interrogada bajo tortura, pesadillas, trastorno del sueño severo, flash back, angustia, y estado de hipervigilancia. Desarrolla estrategias de afrontamiento como tocar las paredes rugosas de la celda durante el sueño y pesadillas para poder identificar que no se encontraba en el Cuartel Borgoño de paredes lisas, la no expresión y encapsulamiento intrapsíquico de sus emociones, no fue capaz de llorar ni expresar otras emociones hasta su libertad en 1989.*

La dificultad en la expresión emocional queda en evidencia frente a situaciones de duelo como el secuestro y desaparición de su cuñado, y fallecimiento de sobrino en el exilio, vive los procesos de duelo en forma privada. Las noticias de asesinatos de amigos y compañeros se viven en forma similar, y lo más doloroso según su relato fue la lejanía con su hijo.” (...) *“En noviembre de 1988 fallece su padrastro, figura afectiva significativa, no se le permite asistir al funeral ni realizar el acompañamiento a su madre. Nuevamente vive el proceso de duelo en forma privada, sin posibilidad de expresar su*

tristeza. La prolongada prisión significó no estar presente en momentos vitales significativos de su hijo, familia y amigos cercanos”.

En el mismo sentido se consignan en el informe las consecuencias personales, a nivel físico tales como *“disfunción articulación temporo mandibular severa secundaria a golpes de gran intensidad y repetitivos en rostro lateral con bruxismo reactivo y cefalea, debe ser controlada en forma periódica; desdentada parcialmente por pérdidas de piezas dentales por inadecuada atención profesional durante detención; síndrome vertiginoso episódico, posible disfunción sistema nervioso autónomo; hematuria persistente posiblemente por traumatismos múltiples en zona lumbar; estrés psicosocial crónico con sintomatología inmunodermatológica (alergia) frente a situaciones de reagudización de estrés”* mientras que a nivel de salud mental se consignan: *“Trastorno de estrés post traumático prolongado; síndrome secuencial a traumatización extrema, desconfianza frente la concepción de seguridad del mundo, pesadillas, flash back, estado de hipervigilancia, trastorno del sueño. Se presenta de manera cíclica en contexto de fechas significativas, situaciones sociopolíticas actuales que rememoran violencia o procesos de re traumatización (deficitaria reparación e impunidad, entre otros); a pesar del elevado impacto en su desarrollo vital en la usuaria destacan rasgos resilientes con una funcionalidad global adecuada, posee estrategias de afrontamiento al estrés y una elaboración parcial de las situaciones traumáticas”.*

15.- Informe policial N° 2155, de fecha 10 de noviembre de 2020, proveniente de la Brigada de Homicidios de Concepción, que rola a fojas 287, en virtud el cual se remite Oficio N° 281 de fecha 20 de octubre de 2020, de la Jefatura Nacional de Delitos contra los DDHH y las Personas que contiene Organigrama de la Central Nacional de Informaciones CNI, entre los años 1981 y 1982. En dicho informe se consigna: División de Inteligencia Metropolitana (C.1) a cargo de Roberto Schmied Sanzi, como superior jerárquico de la Brigada Antisubversiva (C.1.1) cuyo Jefe era Álvaro Corbalán Castilla,

de la cual dependían a su vez otras Unidades, entre ellas la Unidad Rojo, cuyo Jefe era Enrique Sandoval Arancibia.

16.- Declaración judicial por videoconferencia de José Abel Aravena Ruiz, que rola a fojas 337 y siguientes, en que indica: *“A la época de los hechos (1981) me desempeñaba en la CNI, en el cuartel Borgoño, de Santiago (...) trabajaba en la Unidad Antisubversiva, en la Agrupación Azul, cuyo jefe directo era Enrique Sandoval Arancibia. Yo era jefe de equipo, dentro de la categoría de agentes. Mi equipo estaba compuesto por 3 personas cuando fuimos a Concepción.*

En aquella época se nos asignaba una identidad operativa, la mía era “Raúl Inostroza Ortega”, que me fue proporcionada por el servicio. Mi jefe directo, Enrique Erasmo Sandoval Arancibia tenía una identidad operativa que correspondía a la de “Roberto Fuenzalida”.

(...) En abril de 1981, mi equipo fue el primero en trasladarse a Concepción, ya que nos habían encargado como misión investigar a María Soledad Moyano Cárdenas (...). Una vez que tuvimos identificados distintos puntos y contactos, íbamos dando cuenta de los avances de la investigación a Santiago. Fue así como se trasladó a Concepción, mi jefe directo, don Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, junto a los demás agentes. (...)

El operativo se realizó en forma conjunta, se detuvo a más o menos 10 personas, en forma simultánea. En mi caso particular, solo me correspondió la detención de María Soledad Moyano Cárdenas y Juan Sandoval Torres. También participó en esta detención mi jefe directo, don Enrique Sandoval Arancibia. (...)

Los detenidos fueron llevados al Cuartel Bahamondes, en Concepción, luego se dispuso que un grupo de 6 o 7 personas de las detenidas fueran llevadas a Santiago. Yo fui en el grupo con ellos, al aeropuerto Carriel Sur, junto a Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, y uno o dos agentes más. Nos trasladamos en avión o helicóptero, no recuerdo, llegamos al aeropuerto Tobalaba, y luego, nos trasladamos al Cuartel Borgoño, de Santiago, que tenía calabozos para recibir a los detenidos, a diferencia de Concepción, que tenía solo un par de piezas para estos efectos (...).

Cuando a uno lo llamaban a declarar en una causa, lo hacíamos bajo la identidad operativa que teníamos y que entregaba el Servicio. (...)

El nombre de la Agrupación iba cambiando, el objetivo siempre fue el mismo, en el caso de la nuestra, fue Agrupación Azul, Agrupación Rojo y C.3 o C.2, no recuerdo bien. (...)

Consultado respecto de la Jefatura de la Agrupación Rojo, digo que el Jefe era Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, por sobre él estaba el mando de Álvaro Corbalán Castilla (...).

17.- Recurso de Amparo Preventivo Rol N° 4803-1983 interpuesto por Aida Cerro Saavedra, con fecha 18 de abril de 1981, en favor de Lisandro Salvador Sandoval Torres, cuya recepción consta a fojas 343 de autos. Según se lee de fojas 1 del libelo, doña Aída Cerro Saavedra presenta este recurso en carácter de preventivo, en favor de su cónyuge Lisandro Salvador Sandoval Torres, dado que el 15 de abril del actual (1981), aproximadamente a las 13:30 horas, se constituyeron en su domicilio, cinco individuos jóvenes, armados metralletas, que se movilizaban en dos automóviles, patentes de Santiago, quienes preguntaron por su cónyuge y al decirles que no estaba, allanaron su casa habitación sin identificarse ni mostrar orden alguna de detención. Se encuentra incorporado a este recurso, el Decreto Exento N° 3055, del Ministerio del Interior, fechado en Santiago el **16 de abril de 1981**, que dispone el arresto y la mantención en tal calidad, en dependencias de la Central Nacional de Informaciones a: **Juan Sandoval Torres, Lisandro Salvador Sandoval Torres y Aída del Carmen Cerro Saavedra.**

TERCERO: Que, con el mérito de los antecedentes probatorios reseñados en el apartado precedente, consistentes en querella criminal, declaraciones de la víctima y testigos, documentos públicos y privados, por estar fundados en hechos reales y probados, y que por su multiplicidad, gravedad, precisión y concordancia, reúnen los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, conforman un conjunto de presunciones judiciales, que permiten tener por acreditados en el proceso los siguientes hechos:

a) A mediados del **mes de abril de 1981**, un grupo de agentes de la Central Nacional de Informaciones (en adelante CNI) con asiento en Santiago, pertenecientes a la Brigada Azul, que a esa época estaba a cargo de Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, y cuya misión era investigar y desarticular al Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR a nivel nacional, se trasladan hasta la ciudad de Concepción, con el propósito de detener a determinadas personas, miembros del MIR ya identificados por agentes de la CNI de Concepción que operaban en esta ciudad y comunas aledañas, lo que se llevó a cabo en un operativo simultáneo que se extendió entre Hualpencillo y Tomé y que culminó con alrededor de 25 detenidos.

b) Que entre los funcionarios de la CNI convocados para tal misión, esto es, neutralizar las actividades subversivas que el MIR estaba desarrollando en Concepción, se encontraba el Jefe de la Unidad o Brigada “Azul” de la CNI, con asiento en el Cuartel Borgoño de Santiago, Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, quien se traslada a esta ciudad desde Santiago donde desarrollaba sus funciones, junto a un grupo de agentes que tenía a su cargo, y lo hace bajo la identidad operativa de **“Roberto Hernán Fuenzalida Palma”**, acompañado de otros agentes, entre ellos, José Abel Aravena Ruiz, quien actuaba bajo la identidad operativa de “Raúl Inostroza Ortega”.

c) Es así como **el 16 de abril de 1981**, se despliegan por la zona, distintos grupos operativos de agentes de la CNI, de Concepción y Santiago, en la búsqueda de sus objetivos ya identificados y con sus domicilios, reportando, terminado el operativo, un saldo de 25 detenidos, entre ellos, doña Arinda del Carmen Ojeda Aravena.

d) Arinda del Carmen Ojeda Aravena fue aprehendida ese 16 de abril de 1981, en horas de la mañana (10:00 horas aproximadamente), en la vía pública, en las cercanías de su domicilio ubicado en calle Alcázar N°101, en la comuna de Penco, por un grupo de agentes de la CNI; mientras va caminando tras salir de su casa, entre varios sujetos la toman por la espalda, se acerca rápidamente al grupo un furgón utilitario, la víctima alcanza a ver que tenía cortinas, pues acto seguido la tiran dentro de ese furgón utilitario, y desde ese momento la víctima

fue privada del sentido de la vista (vendada y/o encapuchada) y esposada con las manos a la espalda.

e) Es sometida mediante golpes y amenazas, y realizan incluso un simulacro de fusilamiento, para finalmente llegar más tarde, al recinto conocido como Fuerte “El Morro” ubicado en la comuna de Talcahuano, donde es sometida a múltiples sesiones de tortura sobre un catre metálico, mediante aplicación de corriente eléctrica en diversas partes del cuerpo, en lo que se conoce como “la parrilla”.

f) El día 18 de abril de 1981 es trasladada en un avión a la ciudad de Santiago, hecho del que no se percata hasta días después, debido al mal estado físico y psíquico en el que se encontraba a raíz de las sesiones de tortura. Es llevada al Cuartel Borgoño, centro de operaciones de la CNI en Santiago, donde es sometida nuevamente a violentos interrogatorios que incluyen la aplicación de corriente eléctrica en “la parrilla”, y golpes a mano abierta en la cabeza, mediante técnica conocida como “el teléfono”, producto de lo cual quedó con secuelas físicas, tales como lesión en la articulación temporo maxilar y pérdida de piezas dentales.

g) Estuvo detenida en el Cuartel Borgoño durante 18 días, tiempo en el que fue sometida a diversos vejámenes, que incluyeron desnudamientos, aplicación de corriente eléctrica en diversas partes del cuerpo, obligación de mantener posiciones forzadas, privada del sueño y amenazada constantemente de “hacerla desaparecer” y de ir en busca de su hijo para aplicarle similares rigores.

h) El 05 de mayo de 1981 es presentada ante la Fiscalía Militar de Santiago, tras ser obligada a firmar documentos que no le permitieron revisar ni menos leer, oportunidad en la que se percata recién que se encontraba en la capital, tras haber sido trasladada en avión a dicha ciudad el día 18 de abril de 1981.

i) Es procesada por el Tercer Juzgado Militar de Concepción, en causas **Rol 332-1981 y Rol 460-1985**, y condenada por diversos delitos, entre ellos, infracción a la Ley sobre Control de Armas e ingreso clandestino al país. Recuperó su libertad el 21 de agosto de 1989, luego de haber permanecido más de 8 años en prisión, toda vez

que mediante Decreto N° 787, de 18 de julio de 1989, se le reducen las penas que se encontraba cumpliendo, pues habiéndose puesto término al exilio, no es posible la configuración del delito de ingreso clandestino al país.

CUARTO: Que los hechos antes reseñados constituyen delitos reiterados de aplicación de tormentos en detrimento de doña Arinda del Carmen Ojeda Aravena, previsto y sancionado en el artículo 150 N° 1 del Código Penal, en su texto vigente a la fecha de los hechos investigados, perpetrados durante varios días, a contar del 16 de abril de 1981.

QUINTO: Que, por otra parte, los hechos establecidos en autos, a juicio de esta sentenciadora, son constitutivos de ***crímenes de lesa humanidad***.

En efecto, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, en sus artículos 1 y 2 prescribe:

Artículo 1.1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “**tortura**” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.

Artículo 2.1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. 2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la

tortura. 3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7° del Estatuto de Roma, son crímenes de lesa humanidad los atentados contra bienes jurídicos individuales fundamentales, cometidos, tanto en tiempo de paz como de guerra, como parte de un ataque generalizado o sistemático realizado con la participación o tolerancia del poder político de iure o de facto.

En consecuencia, los crímenes de lesa humanidad comprenden todos los tipos penales en virtud de los cuales los Estados Parte de la comunidad internacional sancionan los atentados a los derechos esenciales de las personas, en la medida que se cumplan ciertas condiciones, a saber, que el autor sea un agente del Estado, vinculado directamente o indirectamente a él o grupos formales o informales surgidos al alero de éstos, la existencia de acciones vejatorias de la dignidad de la persona, el amparo de la impunidad y la trascendencia social del acto vejatorio.

En nuestro país el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República de Chile establece que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la libertad.

A su turno, el artículo 5° inciso 2° de la Carta Fundamental dispone que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, estableciendo que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, ya sea que se encuentren garantizados por la Constitución Política de la República de Chile o por Tratados Internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Y en cuanto a Tratados Internacionales sobre la materia ratificados por Chile y vigentes, se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este ámbito, cabe destacar que la Declaración Universal

de Derechos Humanos, en su artículo 3°, señala que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Que, en este caso, las acciones ejecutadas por agentes del Estado pertenecientes a la época de ocurrencia de los hechos a un organismo represivo creado por el gobierno militar, denominado Central Nacional de Informaciones, CNI, que con su actuar, vulneraron bienes jurídicos relevantes para nuestro ordenamiento jurídico, consagrados como Derechos Humanos Fundamentales en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la Constitución Política de la República, afectando la libertad ambulatoria y la seguridad, y la integridad física y psíquica, de doña Arinda del Carmen Ojeda Aravena, desde que la conducta desplegada por dichos agentes del Estado, que tenían a su disposición todos los medios materiales y económicos para llevar a cabo una política estatal de exclusión, hostigamiento, persecución y/o exterminio de ciudadanos acusados de pertenecer a movimientos o grupos políticos que estaban en contra del gobierno militar, como la víctima de autos, sindicada de pertenecer a un grupo terrorista como el MIR, por su naturaleza y la forma en que se llevó a cabo al margen de toda legalidad, no sólo infringió el deber de respeto de los derechos humanos de la persona detenida, que como representantes del Estado les correspondía, sino que, además, fue ejecutada al margen de toda consideración por la persona humana, cuando procedieron a infligir intencionadamente tratos crueles, inhumanos y degradantes, mediante apremios físicos y mentales que le provocaron a la víctima consecuencias traumáticas, ya que por ejemplo, producto de los golpes y tratos crueles quedó con secuelas físicas, tales como lesión en la articulación temporo maxilar y pérdida de piezas dentales. Lo que sin duda permite sostener que nos encontramos en presencia de un crimen contra la humanidad.

EN CUANTO A LA PARTICIPACION.

SEXTO: Que, prestando declaración indagatoria que obra a fojas 333 y siguientes, **Enrique Erasmo Sandoval Arancibia** expone que en el año 1981 se desempeñaba en la CNI, a cargo de la Agrupación Azul -compuesta por unas 15 personas aproximadamente,

entre ellas 3 mujeres- que se dedicaba a investigar todo lo relacionado con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR; su jefe directo era Álvaro Corbalán Castilla, a quien le reportaba todo lo que hacía y éste a su vez era quien le asignaba las misiones que tenía que cumplir. Y que su identidad operativa correspondía a “Roberto Hernán Fuenzalida Palma” y con esta identidad se presentaba en todas las actividades de su vida, incluso al declarar en una causa. Agrega que como en dicha Agrupación era el jefe, realizaba las labores operacionales, administrativas y financieras del personal a su cargo.

Expone que todas las personas que trabajaban en esta Agrupación, lo hacían con nombres operativos, por lo que desconoce sus nombres reales, puntualizando que **por convicción “asume la responsabilidad del mando”**, de modo que no da nombres de los subalternos que dependían de él.

Interrogado sobre la estructura de mando de la CNI, señala que no tiene acceso a esa información; su labor era estudiar, tener conocimiento de lo que sucedía en el país y en el extranjero, indicando que sobre el mando de Álvaro Corbalán Castilla estaba el de Roberto Schmied Zanzi.

Respecto de sus labores específicas, manifiesta que tenían que ver con recabar información sobre el MIR y que desconoce la orgánica de las agrupaciones en que la CNI se dividía, o las labores que cada una cumplía, ya que en materia de inteligencia, se basaban en los principios de necesidad de saber y compartimentaje, lo que impedía saber lo que hacían los demás agentes y tampoco estaba permitido preguntar. Añade que sus labores las desempeñaba en el Cuartel Borgoño, ubicado en el centro de Santiago, frente a la Estación Mapocho, separados por el río.

Refiere que en el mes de abril de 1981, se trasladó desde Santiago a la ciudad de Concepción, al mando de la Agrupación Azul, pues de acuerdo a la información que les proporcionaron, había un grupo de 20 a 25 personas que integraban el MIR y que se dedicaban a realizar atentados en la zona, particularmente al alumbrado público, por lo que vinieron con la misión de participar en las detenciones de

estas personas y que esto ocurrió en la semana santa de 1981. Dice que se trasladó con un grupo de alrededor de 10 personas, subalternos suyos, cuyas identidades, como ha dicho, por convicción personal, no revelará ni recuerda. Agrega que **es responsable del mando y de lo que sus subalternos hayan hecho.**

Manifiesta que la coordinación para el cumplimiento de la misión, se realizó a través de las Unidades Regionales, entre la Unidad Metropolitana y la de Concepción, trasladándose a esta ciudad en dos o tres vehículos y al llegar lo recibió el jefe de la Unidad de Concepción de la época, no recuerda su identidad operativa ni la real.

Relata que en aquella época se habían registrado varios atentados al tendido eléctrico de la zona, por personas identificadas que integraban el MIR, de manera que se les informó por parte de los agentes de Concepción el detalle de los domicilios de las personas que pertenecían a este grupo terrorista, de esta forma se realizó un operativo conjunto para proceder a la detención simultánea de las personas ya identificadas en cada uno de los domicilios. Dice que esto ocurrió en la madrugada del día viernes santo de aquella semana de aquel año. Dice que en el operativo fueron detenidos entre 15 y 18 personas, desde Hualpencillo hasta Lirquén o Tomé, que fue el ámbito territorial de extensión de la operación.

Reconoce que personalmente le correspondió la detención del que se suponía que era el jefe de este grupo, que vivía en Hualpencillo y que estaba con una mujer. No recuerda nombres ni apellidos. Añade que la única persona de este grupo que se arrancó y que no fue detenido, fue en Penco o Lirquén, de nombre Lisandro Sandoval Torres.

Señala que de las personas que fueron detenidas ese día, un grupo de ellas fue trasladada a Santiago, pensando que algunas podían tener información sobre la dirección nacional; pero posteriormente, a raíz que una dama de Penco le entregó información relevante sobre la ubicación de armas, se le encontró, además, información de planos sobre el tendido eléctrico, de modo que fue requerida por la Fiscalía Militar de Concepción para que fuera

investigada y juzgada en esta ciudad. Recuerda que a esa persona la vio en el cuartel Borgoño y le convidó una barra de chocolate, la que le dijo en un primer momento que no comería nada que no hubieran comido los demás, le dijo que los demás ya habían comido así que finalmente aceptó. Y que cuando se la comió le dijo que estaba envenenada y que le dijera su último deseo. Dice que se rió y terminó proporcionándole información sobre un barretín en la ciudad de Concepción, lo que sirvió para que esas personas fueran juzgadas en esa ciudad. Dice que desconoce el destino que tuvieron esos detenidos y si fueron condenados o absueltos.

Hace presente que las personas que llevaron a Santiago, fueron recibidas en el cuartel Borgoño, donde estuvieron por un lapso de 3 días; que al llegar eran revisadas por un médico, en cuanto a sus condiciones de salud y alimentarias, ya que había todo un protocolo para ello; habían baños con agua caliente, estaban en celdas aisladas, mujeres y hombres separados y se les daban todas sus comidas. Que luego se intentaba encuadrar en que nivel de la estructura se encontraban, para dilucidar si eran simpatizantes, ayudistas, militantes, jefes de base o los niveles más altos. Dice que este encuadramiento se realizaba en base a interrogatorios, realizados por agentes en funciones, todos los cuales estaban capacitados para hacer esos interrogatorios, las mujeres preferentemente a las mujeres y los hombres a detenidos varones.

Interrogado por el Tribunal, dice que no recuerda el nombre de Arinda del Carmen Ojeda Aravena. Y en cuanto a los apremios ilegítimos o torturas, nunca lo hicieron. Es falso eso que se dice que practicaban con ratones o con perros adiestrados, de tanto repetirlo se ha creído, reitera que no practicaron apremios ilegítimos ni torturas.

Agrega que el interrogatorio es una lucha de voluntades para conocer a la persona que tiene frente a él, que no conoce, o conoce solo parcialmente; dice que es hijo de una madre, tiene, hermanas, sobrinas, esposa, y una serie de valores culturales y cristianos, que no permiten que llegue a cometer los actos de barbarie de los que se les acusa. Y que en su presencia nunca ocurrieron tales cosas. Que lo

único que se podría llamar tortura, fue que una vez interrogó a una persona durante dos días, casi sin dormir. Un larguísimo interrogatorio porque duerme poco.

Manifiesta que interrogaban a las personas para saber en qué actos terroristas habían participado y el fruto de esta operación se vio reflejado en la tranquilidad que vino después para Concepción; cree que ellos mismos hicieron una autocrítica, ya que si fueron detectados la gran mayoría de los integrantes del MIR, era porque había un soplón o se hizo un trabajo de inteligencia muy bueno, por lo que no se realizaron actividades de parte de ellos por un buen tiempo; los vecinos también supieron que tenían a terroristas viviendo cerca de ellos, así que cesaron sus actividades.

Preguntado si participó en las detenciones de María Soledad Moyano Cárdenas, Juan Simplicio Sandoval Torres, Juan Medardo Bustos Troncoso, Marcos Vinicio Eucarpio Vargas Méndez, Marcela Lavinia Escribano Veloso y Marco Antonio Ríos Ramírez, expresa que la señora María Soledad Moyano Cárdenas era quien tenía domicilio en Hualpencillo y que convivía con el líder de la banda.

Agrega que no tuvo participación directa en la detención de Arinda Ojeda Aravena, porque como todos fueron detenidos a la misma hora, si él estaba en Hualpencillo, no podía haber estado en Penco. Podría haber sido ella la persona a quien le ofreció chocolate como un gesto caballeroso de su parte.

Interrogado por el Tribunal, sostiene que estuvo 2 días en la ciudad de Concepción, llegaron el día viernes a Concepción, el operativo se realizó en la madrugada y el sábado regresaron a Santiago, con un grupo de detenidos, en un avión del Ejército; esas personas iban a su cargo, se trasladó en el avión con ellos, era un grupo de 8 detenidos más o menos, que venían esposados, más un par de agentes, completando un total de 10 a 11 personas. Llegaron en el avión a Tobalaba y desde ahí al cuartel Borgoño. Agrega que cuando los detenidos fueron devueltos a Concepción, se trasladaron en vehículos que vinieron a buscarlos desde Concepción; añade que

él no volvió a Concepción, la misión fue detener a este grupo del MIR y dar la señal que tenían controlada la situación en la zona.

SÉPTIMO: Que, como es dable advertir, el acusado Enrique Erasmo Sandoval Arancibia señaló expresamente en su declaración, que en el año 1981 se desempeñaba en la Central Nacional de Informaciones, CNI, en la ciudad de Santiago, a cargo de la Agrupación Azul -compuesta por unas 15 personas aproximadamente, entre ellas 3 mujeres- que se dedicaba a investigar todo lo relacionado con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.

Empero, tratando de eludir su responsabilidad en el ilícito que se le imputa, cometido en contra de la querellante de autos y víctima doña Arinda del Carmen Ojeda Aravena a partir del 16 de abril de 1981, sostiene que *“no recuerda el nombre de Arinda del Carmen Ojeda Aravena. Y en cuanto a los apremios ilegítimos o torturas, nunca lo hicieron. Es falso eso que se dice que practicaban con ratones o con perros adiestrados, de tanto repetirlo se ha creído, reitera que no practicaron apremios ilegítimos ni torturas”*.

Misma declaración que entrega en términos extrajudiciales, aunque en ésta afirma conocer a la víctima doña Arinda Ojeda Aravena, como consta de lo consignado en informe policial 04871, de 14 de octubre de 2019, que obra en fojas 178 y siguientes, cuando señala que: *para el mes de abril de 1981 se encontraba cumpliendo funciones en la Central Nacional de Informaciones, CNI, desempeñándose como jefe de la Agrupación Azul, encargada de controlar y desarticular al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, a nivel nacional, dicha agrupación la componían 20 funcionarios aproximadamente, de los que desconoce sus nombres verdaderos e instituciones de origen, toda vez que todos tenían identidades operativas. Dice que su superior directo era el Capitán de Ejército Álvaro Corvalan Castilla, quien a su vez dependía del Coronel Roberto Schmied Sanz (sic), con jurisdicción a nivel de la Región Metropolitana. Que, respecto a la víctima de la presente causa, doña Arinda Ojeda Aravena, manifestó haber participado de un operativo en la ciudad de Concepción, donde resultó detenida la mencionada*

persona, junto a otras 25 personas, de las cuales 10 habrían sido trasladadas vía aérea a la ciudad de Santiago, entre ellas la víctima (Arinda Ojeda Aravena), para posteriormente ser llevados hasta el cuartel Borgoño, lugar donde fueron interrogados, consultados por la tenencia de armas de fuego. Expone que recuerda bien a la víctima (se refiere a Arinda Ojeda Aravena) de la presente investigación, toda vez que cuando estuvo detenida, él le habría ofrecido un trozo de chocolate, dando paso con esto a una conversación entre ambos, en el curso de la cual Arinda Ojeda le confesó que en su casa escondía un arma de fuego, lo que comunicó a la brigada de Concepción, y el arma fue recuperada. Que al ser preguntado por los detalles de la detención de Arinda Ojeda, el entrevistado Enrique Erasmo Sandoval Arancibia expresó que la detención de ésta se habría prolongado por siete días, y mientras estuvo en el cuartel Borgoño, nunca fue sometida a golpes y a ningún tipo de apremios por parte de los agentes de la CNI a su cargo. Que luego de este lapso de tiempo, fue entregada a los agentes de Concepción, quiénes la pusieron a disposición de los Tribunales.

OCTAVO: Que, en consecuencia, es un hecho cierto y no discutido, que para el mes de abril de 1981, el acusado **Enrique Erasmo Sandoval Arancibia**, nombre operativo o “chapa”, **Roberto Hernán Fuenzalida Palma**, era un agente de la CNI que trabajaba en el Cuartel Borgoño en la ciudad de Santiago, desempeñándose como jefe de la Agrupación Azul (antes Rojo), encargada de controlar y desarticular al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, a nivel nacional. Y que en el mes de abril de 1981 se trasladó a Concepción y participó de un operativo conjunto con agentes de la CNI a su cargo venidos de Santiago a los que se sumaron agentes locales, resultando detenida la querellante y víctima de autos, doña Arinda Ojeda Aravena, junto a otras 25 personas, todas previamente identificadas como pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, de las cuales unas 8 o 10 aproximadamente fueron trasladadas vía aérea a la ciudad de Santiago, entre ellas doña Arinda Ojeda Aravena,

y llevadas hasta el Cuartel Borgoño de esa ciudad, lugar donde fueron interrogados por la tenencia de armas de fuego.

Que, así lo reconoce por lo demás, el agente José Abel Aravena Ruiz, prestando declaración ante el Tribunal, como consta de fojas 337 y siguientes, quien manifiesta que *“a la época de los hechos, 1981, se desempeñaba en la CNI, en el Cuartel Borgoño de Santiago, agregando que trabajaba en la Unidad Antisubversiva, en la Agrupación Azul, cuyo jefe directo era Enrique Sandoval Arancibia; dice que ambos trabajaban con identidades operativas, siendo la suya “Raúl Inostroza Ortega” y la de su jefe directo “Roberto Fuenzalida”. Refiere que en abril de 1981, su equipo (compuesto por 3 agentes), fue el primero en trasladarse a Concepción, ya que les habían encargado como misión investigar a María Soledad Moyano Cárdenas. Dice que en Santiago hicieron vigilancia a la casa de la mamá de esa señora Moyano Cárdenas, siguieron a un varón que fue a buscar un paquete a esa casa, quien salió de Santiago en dirección al sur, pasó por Temuco, pernoctó en Lastarria, a la mañana siguiente volvió a Temuco y luego se dirigió a Concepción; relata que de ese hecho informaron a su jefe, quien les dijo que lo siguieran hasta donde llegara. Expone que esa persona llegó a Concepción, a una casa ubicada en una población ubicada entre Concepción y Talcahuano, y que en definitiva resultó ser el domicilio de María Soledad Moyano Cárdenas, quien vivía en ese lugar junto a Juan Sandoval Torres. Refiere que una vez que tuvieron identificados distintos puntos y contactos, iban dando cuenta de los avances de la investigación a Santiago y cuando tuvieron todo identificado, vino el resto del equipo desde Santiago. **Fue así como se trasladó a Concepción su jefe directo, don Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, junto a los demás agentes”.***

Que, la información referida al lugar que ocupaba el encausado en la orgánica de la CNI en Santiago en aquel tiempo, queda refrendada con el mérito de los antecedentes allegados a la causa, desde fojas 262 y siguientes, que se extrajeron de la causa Rol 62-2010, tenida a la vista y digitalizada, (fojas 276), sustanciada por la

Ministra en Visita Extraordinaria de la Il. Corte de Apelaciones de San Miguel, doña Marianela Cifuentes Alarcón, y que contiene la información relativa a los integrantes de la CNI encargados de la represión del MIR a la época, lográndose determinar, según la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, que en el año 1981, la Agrupación denominada en ese entonces “Rojo”, era la destinada para investigar y desarticular al MIR, destacando que el Jefe de Agrupación era Enrique Erasmo Sandoval Arancibia (documento fojas 263 vuelta) advirtiéndose que a fojas 265 de autos obra el Listado Agentes CNI, Agrupación Rojo, año 1981, con sus identidades reales y fotografías, encabezando el listado Enrique Erasmo Sandoval Arancibia.

Que, asimismo, tales hechos son absolutamente coincidentes con el mérito de lo obrado en causa del fuero militar, **Rol 332-81, tenida a la vista**, como consta de la resolución de fojas 31 de autos, la que se inicia con el **parte policial C.N.I.F-2.1.4.(R) N° 210.540, de fecha 5 de mayo de 1981**, en cuanto el Director Nacional de Informaciones, General de Brigada, Humberto Gordon Rubio, pone a disposición de la Primera Fiscalía Militar de Santiago (que posteriormente se declaró incompetente y remitió los antecedentes a Concepción), a las personas que se individualizan, las que fueron detenidas y mantenidas en esa calidad en dependencias de esta Central Nacional de Informaciones, en cumplimiento a los Decretos Exentos de Arresto, señalados en la referencia (D.E N°s 3063, 3064 y 3065). Estas **personas fueron detenidas** por personal de esa alta repartición, **el día 16 de abril de 1981 en la VIII Región**, lugar hasta donde se llegó de los delitos que más adelante se mencionan: Juan Medardo Bustos Troncoso; Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena, nombre falso, Isabel Angélica del Carmen Moore Jorquera; Juan Simplicio Sandoval Torres; María Soledad Moyano Cárdenas; Marcos Vinicio Eucarpio Vargas Méndez; Marcela Lavinia Escribano Veloso y Marco Antonio Ríos Ramírez. Se señala que todos ellos pertenecen a la Estructura Militar del Regional Concepción del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, cuya misión principal

era la perpetración de actos terroristas en esa Región del país. Son responsables, de los delitos de ingreso clandestino al país, organización de grupos de combate, tenencia y porte ilegal de armas y explosivos, colocación de artefactos explosivos e incendiarios, diversas infracciones a la Ley N° 12.927 sobre Seguridad del Estado, y otros.

En dicha causa presta declaración (fojas 106), el agente **Roberto Hernán Fuenzalida Palma**, nombre operativo del hoy procesado **Enrique Erasmo Sandoval Arancibia**, quien señala que conoce el motivo de su comparecencia, sabe que es por la detención de 7 sujetos integrantes del grupo militar de combate del MIR, Regional Concepción. Refiere que detiene **el 16 de abril de 1981** en Hualpencillo a María Soledad Moyano Cárdenas. También detiene a Juan Simplicio Sandoval Torres, a pocas cuadras de la casa en Hualpencillo que compartía con María Soledad Moyano Cárdenas. En los chequeos previos se estableció que tenía contacto con Juan Medardo Bustos Troncoso. El mismo día 16 de abril de 1981 detienen a Juan Bustos Troncoso y continúa diciendo: *“El mismo día 16 de abril último, se procedió a la detención de Arinda Ojeda, en la vía pública, a pocos metros de su domicilio en Alcázar N° 101, en la ciudad de Penco. Como señalé anteriormente, al momento de su detención Arinda Ojeda portaba cédula de identidad falsa a nombre de Isabel Moore Jorquera. La detenida no opuso resistencia. Inmediatamente después de su detención, se practicó un allanamiento a su domicilio (...)”*

También declara en la referida causa del fuero militar, el agente **Raúl Inostroza Ortega**, nombre operativo de **José Abel Aravena Ruiz**, quien expresa que conoce el motivo de su declaración, la que gira en torno a la detención de 7 sujetos pertenecientes al MIR, que eran Juan Medardo Bustos Troncoso, Juan Simplicio Sandoval Torres, Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena, María Soledad Moyano Cárdenas, Marco Pinicio Eucarpio Vargas Méndez, Marcela Lavinia Escribano Veloso, y Marco Antonio Ríos Ramírez. **Todos detenidos el 16 de abril de 1981**, y en sus palabras: *“Conozco el motivo de mi*

comparecencia. Es por la detención de siete sujetos integrantes de la estructura militar del MIR Regional Concepción, denominada “Base Madre” o “Comando José Miguel Carrera. (...) dio por resultado la detención de las siguientes personas: (...) Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena.

NOVENO: Que, establecido lo anterior, cabe reflexionar a continuación sobre los actos de tortura que le fueron infligidos tras su detención el 16 de abril de 1981, según relata la víctima señora Arinda Ojeda Aravena, y que describe pormenorizadamente prestando declaración ante el Tribunal. Señala: “...y entré a Chile en febrero de 1980. Ingresé al país en forma ilegal ya que lo hice con documentación, pasaporte y cédula de identidad y nombre falsa “Carmen Julia Gutiérrez Muñoz”, por el aeropuerto de Pudahuel. Mi hijo quedó en Cuba. En el año 1990 vino a Chile conmigo. Cuando volvía a Chile tuve que hacerlo con otro nombre, ya que por haber salido del país por la vía del asilo, no podía ingresar al país de vuelta. Existía el decreto N° 81, del 1973, que disponía que las personas que ingresaban al país bajo otro nombre, vale decir, en forma ilegal, lo hacían con la finalidad de atentar contra la seguridad del Estado y el Gobierno Militar de la época. Pero eso lo supe después, cuando ya estaba privada de libertad.

*Al ingresar, me voy a vivir a la ciudad de **Penco, Alcázar 101, casa arrendada.** Nosotros veníamos a organizar resistencia, pensando que había alguna base acá para hacerlo, sin embargo, nos encontramos con que estaba todo desarticulado en esta región. (...)*

Me correspondió trabajar junto a otros compañeros: Juan Bustos Troncoso, y Juan Sandoval Torres, con quienes conformábamos una base madre, trabajábamos con un enlace en Santiago de quien nunca supe su nombre y que no cayó detenido con nosotros. Nos dedicábamos a la búsqueda y organización de personas.

En el año 1981, el 16 de abril, fui tomada prisionera, en las circunstancias que relataré. Ese día, era un jueves de semana santa, cerca de las 10 de la mañana, salgo de mi casa, doy vuelta la esquina y cuando voy caminando me toman por la espalda y quedo en vilo. Yo

portaba un bolso con una correa de cuero, tiran el bolso y se rompe al correa. En ese instante se acerca un furgón utilitario, abren la puerta y me tiran dentro de él. Alcanzo a ver que el furgón tenía cortinas. De inmediato me tapan la vista y me esposan con las manos en la espalda.

Uno de mis captores me abofetea, y me pregunta si hay alguien en mi casa. Insisten en ello, sin embargo yo vivía sola en esa casa. Por los sonidos siento que hay gente circulando por lo que presumo que estaban haciendo un operativo para entrar a la casa. De hecho, la allanaron, según supe por mi madre que a los días después intentó recuperar mis cosas, pero se encontró con la casa desvalijada. Solo rescató un living, una cama y otros utensilios. Las cosas de valor no fueron recuperadas.

Cuando el tipo me abofetea, yo lo intenté morder, no se si lo logré, pero después este sujeto me la cobró muy cara en el ámbito de las torturas. Me pegaron muchas veces en el pecho, quitándome la respiración.

Después de un tiempo, el furgón se pone en marcha, y me llevan a un lugar que está al aire libre, en un cerro. Me bajan, se escucha el ruido de los árboles, y se siente el aroma del mar. Me hacen “ruleta rusa”, que consistía en ponerme un arma de fuego en la sien, y decirme “hasta aquí nomás llegaste”, con garabatos correspondientes, y percuten el arma sin que salga tiro. Repiten esta acción dos veces. Luego me suben nuevamente al furgón, bajan el cerro y me doy cuenta que vamos circulando por calles.

Llegamos a otro lugar que mucho después me enteré que era el Fuerte El Morro, allí estuve dos días. En este lugar fui torturada, conocí por primera vez lo que se llama “la parrilla”. Al llegar al lugar, me preguntaba yo qué pasó con mis compañeros, Bustos y Sandoval. Allí nos ponían una venda que permite ver hacia abajo por el ángulo de la nariz, allí pude reconocer a Simplicio Sandoval, por los zapatos. Luego escuché un grito y pude reconocer la voz de Bustos. Así entonces, pude concluir que habíamos caído los tres.

En ese lugar me tomaron huellas dactilares. Me sometieron a múltiples torturas consistentes en subirme a la parrilla, esto es, que me pusieron desnuda en un catre metálico, con los brazos y piernas amarrados a los lados, y un almohadón en la boca, para acallar los gritos, me aplicaban corriente eléctrica con diversas intensidades para probar la resistencia de la persona.

Intercalaban las salidas a los interrogatorios con la reclusión en unos cuartos o módulos de concreto pequeños, no eran cerrados. A uno la dejaban sentada, esposada con los brazos a la espalda, de cara a una pared.

En concreto, en El Morro, la tortura consistió en parrilla y golpes, porque yo tuve la mala ocurrencia de no decir mi nombre verdadero, por eso era que me preguntaban con mucha insistencia por mi nombre y se intensificaban las torturas, seguramente lograron saber mi nombre verdadero una vez que tuvieron el resultado de las huellas que me tomaron.

A la segunda noche me sacan de ese lugar, y yo deduzco que no iba en buenas condiciones producto de la torturas. Sentí el mal olor de la isla Rocuant. Me llevaban en un auto, luego me trasladaron a otro vehículo, no sé de qué tipo, sentía que vibraba solamente. Me ponen en uno de los asientos, siempre esposada. Y un tipo me llevaba agarrada desde el asiento del lado, y me decía “te vamos a tirar para abajo”. Yo no sabía en qué íbamos (lo cierto es que íbamos en una avioneta, pero eso lo supe después), solo sentía un enjambre de abejas en mi cabeza de modo que las amenazas de lanzarme abajo, me eran indiferentes, no alcanzaba a procesar las ideas. Después de un rato, me bajaron de la avioneta y me pusieron en un vehículo.

Llegamos a un lugar donde nos bajaron a un subterráneo, allí nuevamente me tomaron huellas, me sacaron la ropa y me obligaron a ponerme un mameluco enorme con cierre, y unas zapatillas tipo chancletas. También nos pusieron un antifaz que queda pegada a la piel, de modo que ya no se podía ver nada.

En ese lugar, me derivaron a una celda sola, de puerta metálica, con una ventana en un extremo que se abría por fuera. Había allí un

camastro de cemento, sin frazadas, ni nada. Las paredes estaban pintadas con óleo, lisas y brillantes. Esto lo digo porque lo pude apreciar cuando me levantaba el antifaz cuando me dejaban sola en esa celda.

Desde esa celda, me llevaban a otra habitación donde estaba la parrilla. Aquí noté que los métodos de tortura eran más profesionales, desde que me amarraban no solo de los brazos y piernas sino también a la altura del abdomen, con un cinturón grueso que nos sostenía al catre, esto porque con la corriente eléctrica el cuerpo se arquea. Me ponían los electrodos en distintas partes del cuerpo, en los pezones, en la vagina, incluso introduciéndolos en todo lo que fueran orificios del cuerpo. Y luego aplicaban la corriente con mucha intensidad. Aquí aparece el sujeto al que intenté morder cuando me detuvieron, me toma desde los vellos del pubis y me levanta con mucha fuerza, me dice cosas como “así que te las dabas de valiente”. Me hizo sangrar. Nunca supe su identidad, porque además ellos se nombraban por apodos. No era una sola persona la que estaba en la tortura, eran varios y sus voces se confunden.

En este lugar aparece ahora la figura de un médico que viene a verificar si la persona puede seguir siendo torturada. Puesto que llega un punto en que producto de la corriente que se aplica, uno se desvanece. De modo que recuerdo haber perdido la conciencia, y una voz que decía “déjenla descansar” y los sujetos se referían a él como “doc”.

En diversas ocasiones me sometieron a la tortura del teléfono, que consistía en que mientras estaba sentada amarrada a una silla, me golpeaban a los costados de la cara, e iban contando hasta 30 golpes para cambiarse de torturadores y seguir dándome. Eso tuvo un efecto posterior, que es que, se me produjo una lesión en la articulación témporo maxilar, y esa lesión como no fue curada por largos años, finalmente me produjo una artrosis irrecuperable, unida a falta de piezas dentales, que se cayeron producto de los golpes. A la larga no podía mascar, debía consumir solo líquidos. Eso me afectó bastante, porque era el recuerdo permanente de las torturas a las que

fui sometida. Después del trabajo de la Comisión Valech, salió una ley a la que me acogí y que en su artículo 10 contemplaba la posibilidad de iniciar un tratamiento de recuperación para tratar las secuelas de la tortura. En mi caso, fue un tratamiento con recuperación de piezas dentarias, y estabilización de la mandíbula, para poder comer con normalidad. La artrosis es irrecuperable. Debo usar plano de relajación para dormir y algún medicamento para el dolor cuando se producen crisis. Estos efectos son los más evidentes, porque los otros son a nivel emocional.

A través del Programa PRAIS, recibo atención psiquiátrica y psicológica desde su institución. Antes de ello, la Vicaría de la Solidaridad, me otorgó asistencia médica a través de la doctora Marina Casanova, aquí en Concepción.

En el cuartel Borgoño, los torturadores hacían un juego que denominaban “gallinita ciega”, donde mientras a uno lo mantenían vendado, ellos se posicionaban en círculo y nos arrojaban de uno a otro, empujándonos. A veces nos dejaban caer. Todo esto por supuesto, iba dejando huellas físicas, como hematomas, sangramientos, moretones.

Otra cosa eran “la ducha”, que era un cubículo que tenía espejos por todos lados, ellos desde afuera veían hacia adentro. Ellos contaban hasta un cierto número y me sacaban sorpresivamente hacia afuera, mojada como estuviera, mientras uno trataba de ponerse el mameluco. Yo tenía el pelo largo en aquella época de manera que pasaba muchos días con el pelo mojado. Esto significó que se me inflamara la garganta, con mucha fiebre, considerando además, los gritos ahogados por el almohadón producto de la tortura en la parrilla.

Otra técnica que utilizaban, eran formas de castigo, por ejemplo, dejarte en cuclillas por mucho rato, o con los brazos hacia adelante, o hacia arriba, en alguna posición incómoda que era difícil de sostener por mucho tiempo. Había gente mirando y si uno bajaba los brazos o cambiaba la posición venía el castigo físico.

Otra forma de tortura era la amenaza constante de hacernos desaparecer, me decían “tu no existes aquí, ya que llegaste con otro nombre”.

Me amenazaron, asimismo, con atentar contra mi hijo, me dijeron “nosotros podemos hacer lo que queramos en cualquier parte del mundo” y recordaban el atentado contra Bernardo Leighton en Italia. Ellos creían que mi hijo estaba en Italia, y yo jamás dije que no era así. Me mostraban una fotografía que yo tenía en mi casa, escondida, donde aparece mi niño pequeño aun, durmiendo. Este hecho era tremendamente violento para mí, porque estando amarrada no podía quitárselas. Me levantaban el antifaz para que viera la fotografía.

Estuve 18 días en el Cuartel Borgoño. Se que pasé allí un 01 de mayo porque se notó el ajetreo y cuando me llevaban al baño o a la parrilla había que pasar entremedio de mucha gente que estaba en el suelo.

Después de ese evento empieza a disminuir la violencia física, y después de eso, nos hacen poner nuestra ropa, y puedo notar que somos varios porque vamos en fila y nos indican poner la mano en el hombro del que va delante; nos llevan a una sala donde se nota que hay más gente. Nos sitúan alrededor de una mesa, y ahí nos hacen sacarnos el antifaz, y prenden unos focos que nos encandilan. No pudimos ver nada. La mesa estaba llena de cosas tales como armas de todo tipo, elementos de sanidad como botiquín, entre otras cosas. Allí nos filmaron. Se escuchó que los tipos que estaban ahí manipulaban sus armas pasando bala. No se cuánto duró eso. Nos hicieron volver a la celda y ponernos nuevamente el mameluco.

Luego de eso, vino un chequeo médico, que consistió en llegar a un box médico donde había una camilla, donde un sujeto de bata blanca y fonendoscopio, al que pretendí decirle algo, me dijo “cállate, estás bien” y firmó un papel.

Seguidamente, llegan a la celda dos o tres tipos con un montón de papeles que me obligan a firmar mientras permanecía vendada por lo que desconozco el contenido de dichos documentos.

Luego de eso, me hacen vestir con mi ropa. Me ponen scotch en los ojos, y unas gafas, y me sacan. Me ponen en un auto que además del chofer va un tipo conmigo que me abraza para sujetarme y me dice “aquí vamos pololeando”. Al estacionar el vehículo, el sujeto me dice “cuidadito con lo que dices, porque si no, volvemos”. Y ahí me hacen bajar, me sacan el scotch que sale con pestañas y cejas. Yo voy esposada, el tipo atrás me va guiando. Me doy cuenta que estoy en la Plaza de la Constitución, en Santiago. Fue un golpe para mí, porque hasta ese momento, no me había dado cuenta que había salido de Concepción. Llegué a la Fiscalía Militar. En ese lugar veo a Bustos y Sandoval, junto a otras dos personas que no conocía en ese momento, varones, que después aparecieron en mi proceso, seguido ante la justicia militar, y también dos mujeres que tampoco conocía en ese momento. Estuvimos presas largos años juntas, por el mismo proceso. Es la causa Rol 332-81 de la Fiscalía Militar de Concepción que siguió este proceso ya que la de Santiago se declaró incompetente.

Durante la declaración que nos tomaron en la Fiscalía, permanecían agentes detrás nuestro, que eran de la CNI. Aún así, me atreví a decirle al Fiscal que había sido torturada y que las declaraciones contenidas en los documentos que aportó la CNI las había firmado mientras estaba vendada. No me atreví a decir mucho más por el miedo de volver a lugar del que me habían sacado y donde me habían torturado. Presté declaración ante el Fiscal.

Coincidente con las declaraciones de la víctima, respecto de los lugares y forma en que fue torturada por agentes de la CNI en aquel mes de abril de 1981, se allegó a los autos la declaración extrajudicial de dos testigos, Juan Simplicio Sandoval Torres y María Soledad Moyano Cárdenas, como consta de fojas 152 y 154 respectivamente, los que fueron detenidos el mismo día que la señora Arinda Ojeda

Aravena, 16 de abril de 1981, por agentes del Estado pertenecientes a la CNI, que también fueron conducidos y estuvieron detenidos en el centro de detención “El Morro” de Talcahuano y en el “Cuartel Borgoño” en la ciudad de Santiago; del mismo modo fueron torturados, según afirman, y más aún, el testigo Juan Torres Sandoval, (*que fue cuñado de la señora Arinda Ojeda Aravena, dado que ésta estuvo casada con su hermano mayor Héctor Sandoval Torres y tienen un hijo*) refiere haber visto en ambos lugares a la víctima señora Ojeda Aravena, dado que por un espacio que le dejaba la venda, ello le permitió observar a otros detenidos. No escapa al criterio de la sentenciadora, que Juan Simplicio Sandoval Torres y María Soledad Moyano Cárdenas, al igual que la víctima, formaban parte del grupo de detenidos en el operativo llevado a cabo por el encartado Enrique Erasmo Sandoval Arancibia y los agentes a su cargo, el 16 de abril de 1981, y que dio origen a la causa del Tercer Juzgado Militar de Concepción, Rol 332-1981, analizada precedentemente.

También coincidente con las declaraciones de la víctima en cuanto a las torturas sufridas a manos de sus captores, tras su detención el 16 de abril de 1981, es el documento allegado a la querella criminal con que se inicia esta investigación y que consiste en **Copia simple de denuncia, anexo N° 2, que tiene fecha 05 de mayo de 1981**, y que consiste en una denuncia que presenta la señora Ojeda Aravena el día que es llevada ante la Fiscalía Militar de Santiago, por las torturas sufridas desde el momento mismo de la detención; en el documento, se lee: “*A su pregunta, desde el día 16 de abril hasta la fecha estuve detenida en la CNI, recibí los siguientes apremios: aplicación reiterada de corriente eléctrica en todo el cuerpo, especialmente en los genitales, interrogatorios estando completamente desnuda y además ciertas violencias sexuales sin llegar a la violación, como por ejemplo, tirones violentos de los pezones, golpes violentos en la cabeza y oídos. Además hubo presiones de tipo psicológicos como el fantasma de hacerme desaparecer, ya que por el hecho de haber entrado ilegalmente al país ‘no existíamos’ y que así se puede ‘hacer y deshacer’ con nosotros*”.

DECIMO: De esta manera, resulta indubitado que la víctima fue torturada, puesto que el documento asentado en el motivo anterior, que deja constancia de haber sido sometida a actos constitutivos de tortura, desde el 16 de abril de 1981 al 5 de mayo del mismo año, previo a ser presentada la señora Ojeda Aravena ante la Fiscalía Militar de Santiago, con más la declaración de la víctima ante este Tribunal, resultan cruciales como indicios inculpatorios, puesto que ella, **más de treinta y ocho años después de ocurridos los hechos materia de esta investigación**, recuerda con total precisión los detalles de las torturas a que fue sometida desde el momento mismo de su aprehensión sin orden judicial o administrativa competente y llevada inmediatamente a centros de detención clandestinos de la Dina, “El Morro” de Talcahuano y el “Cuartel Borgoño” en la ciudad de Santiago, a partir del 16 de abril de 1981, día de su detención, por agentes de la CNI, pertenecientes a la Agrupación Azul, y cuya tarea específica era la desarticulación y el exterminio del MIR a nivel nacional; y si bien no se logró identificar a los autores materiales, es un hecho indesmentible que el jefe de dicha Agrupación, como él mismo lo reconoce, y además dan cuenta los antecedentes documentales y el testimonio de un subordinado, era en ese entonces el encausado Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, quien, además prestando declaración ante el Tribunal, señala enfáticamente **que es responsable del mando y de lo que sus subalternos hayan hecho**.

De manera que conforme lo narrado y analizado, no es creíble lo aseverado por el encartado (*...y mientras estuvo en el cuartel Borgoño, nunca fue sometida a golpes y a ningún tipo de apremios por parte de los agentes de la CNI a mi cargo*) quien, como es dable advertir, niega la aplicación de torturas a doña Arinda Ojeda, pues, a juicio de la sentenciadora, la descripción de tales conductas punibles, plasmada en documento signado como **anexo N° 2 acompañado a la querella**, en los días en que estaba en manos de sus captores en el Cuartel Borgoño de Santiago, con una privación ilegítima de libertad extensa (ya era el 5 de mayo de 1981) y en un recinto secreto de la Dina por aquel entonces, y posteriormente y a muchos años de

ocurridos tales hechos, en forma muy detallada cuando se enfrenta al Tribunal y entrega su declaración tras la presentación de la querella, solo puede explicarse por haberlos padecido, y cuyos efectos en su salud y en el ámbito psicológico han persistido en el tiempo, como dan cuenta los antecedentes que se pasan a analizar.

UNDECIMO: Que, los efectos que la tortura tuvo en la vida de la víctima y querellante de autos con el paso de los años, se reflejan, asimismo, en el informe del Servicio Médico Legal de Concepción, relativo al examen que se le efectuó conforme al Protocolo de Estambul, que corre agregado a fojas 119 y siguientes, el que concluye: *“De acuerdo a la evaluación psicológico-forense realizada, es posible concluir que doña Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena presentó sintomatología concordante con un trastorno de Estrés Post Traumático, posterior a un hecho traumático, caracterizado por síntomas como, persistencia de la reexperimentación del trauma, evitación e hiperexcitabilidad, durante un periodo largo de tiempo, que ha afectado la forma de relacionarse con su entorno. Si bien la examinada cuenta con recursos cognitivos, afectivos y emocionales que le han permitido retomar la vida personal y con su hijo, persisten síntomas como una mayor hipervigilancia y pensamientos, emociones y sensaciones que actúan como disparadores emocionales y que frente a cualquier situación inesperada pueden desencadenar recuerdos del trauma. El impacto emocional de la experiencia vivenciada, constituye lesiones psicológicas imborrables para su aparato psíquico”.*

Por otra parte, el informe elaborado por el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos, PRAIS, de fojas 278 y siguientes, deja constancia de las consecuencias que la vivencia de la tortura y detención prolongada dejó en la víctima; a nivel físico se describe: *“disfunción articulación temporo mandibular severa secundaria a golpes de gran intensidad y repetitivos en rostro lateral con bruxismo reactivo y cefalea, debe ser controlada en forma periódica; desdentada parcialmente por pérdidas de piezas dentales por inadecuada atención profesional durante*

detención; síndrome vertiginoso episódico, posible disfunción sistema nervioso autónomo; hematuria persistente posiblemente por traumatismos múltiples en zona lumbar; estrés psicosocial crónico con sintomatología inmunodermatológica (alergia) frente a situaciones de reagudización de estrés”; mientras que a nivel de salud mental se consigna: “Trastorno de estrés post traumático prolongado; síndrome secuencial a traumatización extrema, desconfianza frente la concepción de seguridad del mundo, pesadillas, flash back, estado de hipervigilancia, trastorno del sueño. Se presenta de manera cíclica en contexto de fechas significativas, situaciones sociopolíticas actuales que rememoran violencia o procesos de retraumatización (deficitaria reparación e impunidad, entre otros); a pesar del elevado impacto en su desarrollo vital en la usuaria destacan rasgos resilientes con una funcionalidad global adecuada, posee estrategias de afrontamiento al estrés y una elaboración parcial de las situaciones traumáticas”.

DUODECIMO: Que, ahora bien, en torno a los padecimientos derivados de la tortura, conviene dejar sentado que la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en el **artículo 5.1** consagra en términos generales el derecho a la integridad personal, tanto física como moral. A su vez, el artículo **5.2** establece de manera más específica la **prohibición absoluta de someter a alguien a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes**, así como el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada con el respeto debido a la **dignidad inherente al ser humano**.

De este modo, la **tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes** están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y constituye en tal sentido una norma de ius cogens, por lo que “*dicha prohibición es **absoluta e inderogable**, aun en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades*

públicas”. Así lo ha afirmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas sentencias, tales como Caso Lori Berenson Mejía vs Perú, párrafo 100; Caso Mendoza y otros vs Argentina, párrafo 173; y Caso J. vs Perú, párrafo 304.

En el caso en comento, a este Tribunal le cabe la absoluta convicción que los hechos descritos constituyen torturas a la luz de los instrumentos internacionales referidos, en tres dimensiones: físicas, sexuales y psicológicas.

a) **Violencia física**, que se evidencia a través de la aplicación de corriente eléctrica en distintas partes del cuerpo, privación del sueño, posturas incómodas, desnudamientos, golpes a mano abierta en la cabeza principalmente, a través de la técnica conocida como “teléfono”, entre otras descritas latamente por la víctima, que además dejaron daños físicos permanentes en su cuerpo y en su psiquis, en virtud de los cuales ha debido recibir tratamiento durante décadas.

b) **Violencia sexual** ejercida hacia la víctima durante el periodo de privación de libertad en manos de la CNI, la que se concretó mediante actos tales como tirones de sus pezones, desnudamientos forzados, ser obligada a ducharse en presencia de agentes de la CNI, tirones del vello púbico hasta hacerla sangrar y aplicación de corriente eléctrica en los genitales, son actos constitutivos de violencia sexual aunque no impliquen penetración, tal como lo ha razonado la Corte Interamericana en el caso “Espinoza González vs Perú”, explicando que este tipo de conductas, forman parte de un contexto más amplio de discriminación contra la mujer, prácticas proscritas por diversos instrumentos internacionales, entre ellos, por la Convención de Belém do Pará, que obliga a analizar las características personales de la víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, para ser tomadas en cuenta al momento de determinar si su integridad personal fue vulnerada y en qué medida, toda vez que tales características, como es en la especie la dimensión de mujer y madre de la señora Arinda Ojeda Aravena, pueden cambiar la percepción de la realidad de la víctima, y por ende incrementar el sufrimiento y el

sentido de humillación cuando son sometidas a ciertos tratamientos degradantes, además denotan claramente el ejercicio de poder de los agentes de Estado.

c) **Violencia psicológica** que ha sido ampliamente desarrollada por la jurisprudencia internacional. Así, la Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido que es suficiente el mero peligro de que vaya a cometerse alguna de las conductas prohibidas para que pueda configurarse la vulneración, aunque el riesgo debe ser real e inmediato. De modo que, amenazar a alguien con torturarlo o “hacerle desaparecer”, o “arrojarla al mar” puede constituir por lo menos un trato inhumano. Además, ha señalado la Corte que debe tomarse en cuenta no solo el sufrimiento físico, sino también la angustia moral; y que la amenaza de hacer sufrir a una persona una grave lesión física puede ser considerado una tortura psicológica. Así, en el caso objeto de examen en la presente sentencia, las constantes amenazas que recibió la señora Arinda Ojeda Aravena en torno a acabar con su propia vida, diciéndole los agentes que por haber ingresado en forma ilegal al país, no existía y podían hacer lo que quisieran con ella, o la amenaza de tirarla por la puerta del avión mientras era trasladada desde Concepción a Santiago, son para este Tribunal, sin lugar a dudas, actos que pueden ser calificados de torturas psicológicas, al haber sido sufrimientos infligidos deliberadamente con el propósito de suprimir sus resistencia, forzarla a autoinculparse o a confesar, o delatar a sus compañeros de partido; o para castigarla por sus supuestas conductas delictivas, adicionales a la privación de libertad en si misma. Estos principios fueron también recogidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Cantoral Benavides vs Perú”.

Luego, en el mismo sentido, la sentenciadora pasará a referirse a ciertas amenazas específicas recibidas por la señora Arinda Ojeda, que le significaron un sufrimiento psicológico adicional, que debe examinarse a la luz de la perspectiva de género, en su condición de madre. Tal como lo desarrolló la Corte Interamericana de Derechos

Humanos en el caso penal “Miguel Castro vs Perú”, en circunstancias en que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padeció sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de su hijo, a quien había tenido que dejar en el extranjero al venirse a Chile, ya que los agentes de la CNI durante los interrogatorios le levantaban la venda de los ojos y le mostraban una fotografía del hijo mientras dormía siendo pequeño, y la amenazaban constantemente con ir a buscarlo para retenerlo y aplicarle similares rigores a los que ella padecía. Estos actos constituyen en sí mismos actos de tortura psicológica, que se ve agravada por su condición de madre, y que constituían actos preparados deliberadamente para suprimir su resistencia durante los interrogatorios. La condición de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima de autos, perduró incluso después de su cautiverio en centros de detención de la CNI, hecho que queda comprobado cuando percibe como una amenaza real la posibilidad de que su hijo fuera capturado en 1987, cuando ella ya se encontraba cumpliendo la condena que le impuso la Justicia Militar, dando cuentas de los efectos prolongados de la violencia psicológica y del alto impacto emocional y angustia moral que esta clase de amenazas le generaba.

DECIMO TERCERO: Que, en relación a la **responsabilidad del mando que reconoce el acusado**, por ser el Jefe de una Brigada de la CNI, la así llamada Agrupación Azul a la época de ocurrencia de los hechos punibles, cuyo propósito era desarticular al Movimiento de Izquierda Revolucionario a nivel nacional, preciso es consignar que tratando de eludir su responsabilidad en el ilícito que se le imputa, señaló que jamás la señora Ojeda Aravena fue sometida a torturas o malos tratos.

Sin embargo, de los antecedentes probatorios referidos en los apartados precedentes, se verifica que efectivamente al mes de abril de 1981, él se encontraba al mando de la citada Agrupación, y por lo anterior, resulta inverosímil que siendo el Jefe no haya advertido, no haya sabido, lo que hacían los agentes a su cargo, tanto en sus

desplazamientos a esta ciudad, como en las detenciones de personas ya identificadas como pertenecientes al MIR (cuyo es el caso de la señora Ojeda Aravena) y en su traslado a centros clandestinos de detención, y la conducta violenta y arbitraria que manifestaban en los interrogatorios, cuando tenían a los detenidos a su merced, desnudos y por cierto vendados.

A juicio de la sentenciadora, en el ejercicio del mando que ostentaba, tenía la obligación primera de asumir por entero las responsabilidades emanadas de sus funciones como Jefe de la Agrupación, exigiendo de sus subordinados y de él mismo, una conducta exenta de todo reproche, **sobre todo en el trato con los detenidos**, como seguramente lo enseña la doctrina militar. Lo que en el caso de autos claramente no fue así, en atención a lo relatado pormenorizadamente por la víctima en cuanto a los actos de barbarie que cometieron los agentes de la Brigada Azul en detrimento de su persona.

Por consiguiente, no es admisible, que el acusado Enrique Erasmo Sandoval Arancibia pretenda eximirse de responsabilidad penal, pues estuvo en condiciones de advertir el actuar ilícito de sus subordinados y de adoptar todas las medias posibles para impedir o reprimir tratos crueles, inhumanos o degradantes, en relación con las personas que mantenían detenidas en centros clandestinos de detención como el Cuartel Borgoño de Santiago, lugar precisamente donde el encartado desarrollaba sus funciones y donde estuvo privada de libertad la víctima de esta investigación, por al menos 20 días, sin que nadie supiera de su paradero.

DECIMO CUARTO: Que, en consecuencia, en los hechos punibles materia de esta investigación, correspondió a Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, **responsabilidad por mando**, atendida su calidad de superior jerárquico de quienes detuvieron en forma ilegal -desde que lo fue sin orden competente- y luego torturaron reiteradamente durante varios días a contar del 16 de abril de 1981, a doña Arinda Ojeda Aravena, toda vez que en el ejercicio de su mando,

que no podía eludir, debió evitar que sus subordinados afectaran o pusieran en peligro la libertad ambulatoria y la seguridad individual de la víctima, velando por una actuación conforme a derecho; en este ámbito de su competencia, debió adoptar de manera directa y sin demora, las medidas necesarias para ejercer un control adecuado sobre la conducta de los agentes bajo su mando para con la víctima, y seguidamente, debió disponer que fuera puesta a disposición de la autoridad judicial o militar correspondiente dentro de plazo legal, y no 20 días después de su detención, ya que ha quedado acreditado que compareció ante un Fiscal Militar en Santiago el **5 de mayo de 1981**.

Reafirma su responsabilidad de mando lo consignado en su Hoja de Vida, recibida en esta causa mediante oficio allegado a fojas 312, y ordenada mantener en cuaderno separado como consta a fojas 313. Destaca en este documento oficial, a fojas 5 vuelta, una anotación de mérito titulada “Vocación Profesional. Felicitación”, estampada con fecha **8 de mayo de 1981**, firmada por el calificador R.Schmied Z, y que se lee: *“Es felicitado por el excelente desempeño y eficiencia demostrado como Comte de Agrupación Rojo en la investigación de la operación “ilegible Zorro”, logrando la detención de la cúpula del MIR en la Octava Región, evidenciando con ello un alto grado de interés y predisposición en el cumplimiento de sus labores específicas”*.

DECIMO QUINTO: Que, en mérito de lo razonado, y las presunciones recién enunciadas, que reúnen los requisitos del artículo 488 del mismo Código, permiten tener por acreditada en el proceso, a juicio de la sentenciadora, la participación del acusado Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, en calidad de autor de delitos reiterados de aplicación de tormentos cometidos en contra de doña Arinda del Carmen Ojeda Aravena, durante varios días, a contar del 16 de abril de 1981, en los términos del **artículo 15 N° 2 del Código Penal**.

EN CUANTO A LA DEFENSA.

DECIMO SEXTO: Que, a fojas 438 y siguientes, el abogado Claudio Peñailillo Farías, por el acusado Enrique Erasmo Sandoval

Arancibia, contesta la acusación fiscal y adhesión particular, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, sosteniendo que al mes de abril de 1981, su representado se desempeñaba como Jefe de la denominada Brigada o Agrupación Azul de la CNI, más, no es efectivo, como lo señala la acusación fiscal que su representado haya ostentado el cargo de Jefe de Operaciones de la División Santiago de la CNI, siendo sus jefes directos el Mayor Álvaro Corbalán Castilla quien ejercía el cargo de Comandante de la Unidad Antisubversiva y el Coronel Roberto Schmied Sanzi, quien era el Jefe de la División Metropolitana, a quienes les reportaba sus actividades y de ellos emanaban las órdenes e instrucciones que recibía. A la Agrupación Azul que comandaba su representado con el grado de Capitán, le correspondía labores específicas de recabar información y seguimiento del grupo denominado Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR, el cual tenía participación en atentados a tendidos eléctricos. Se le ordena su traslado y participación en las operaciones de detención de estas personas, en coordinación con personal de la CNI Regional Concepción, que había realizado originalmente las labores de inteligencia y determinación de identidades y domicilios. En este contexto viaja a esta ciudad en compañía de 9 funcionarios de su Unidad y se colocan a disposición de Jorge Mandiola Arredondo, quien por tener mayor antigüedad y el grado de Mayor, queda a cargo de los operativos; éste a su vez tenía el cargo de Comandante de la CNI Regional Concepción. Señala que realizan el operativo conjunto por orden de investigar y de detención emanada de la Fiscalía Militar de Concepción, deteniendo a diversas personas en distintas localidades de la región, aseverando que a su representado le correspondió realizar las detenciones en Hualpencillo donde supuestamente se encontraba el jefe del aparato del MIR regional. Indica que los operativos se realizaron sin mayores dificultades y sin disparar un solo tiro, y parte de los detenidos, alrededor de 8 a 10, fueron llevados a la ciudad de Santiago por su representado, en un avión del Ejército dispuesto para tal efecto por la superioridad, con el objeto de recabar

de ellos mayores antecedentes, en tanto que los otros detenidos quedaron a cargo de personal de Concepción.

Agrega que respecto de doña Arinda del Carmen Ojeda Aravena, fue detenida en ese operativo por personal de la CNI, Regional Concepción, siendo trasladada al recinto militar conocido como El Morro. En dicha Unidad es interrogada por personal femenino y al término de esos interrogatorios es entrevistada por Sandoval Arancibia, con el objeto de cotejar la información obtenida por los interrogadores y la que ya tenía en su poder la Brigada Azul. Que si bien la víctima señala que fue sometida a golpes y amenazas de diversa naturaleza y a un “simulacro de fusilamiento”, sin embargo, no señala donde ni quienes participan de esas supuestas agresiones; lo que si señala, es que los integrantes que la detuvieron eran 3, un conductor y 2 agentes, quienes la trasladan al recinto militar conocido como Fuerte El Morro. Luego es trasladada a la ciudad de Santiago, junto a otros detenidos, lugar donde la entregan a personal que procedería con los interrogatorios, ya que por temas de seguridad y compartimentaje, dichas labores no fueron realizadas por el mismo personal que hizo las detenciones. Al entrar al Cuartel Borgoño, fueron sometidos a controles médicos para el chequeo de su estado de salud, y los interrogatorios fueron realizados por personal femenino, como lo señalan los protocolos internos; hace presente que desde la llegada del Director de la CNI Odlanier Mena, se seguían estos protocolos, ya que a esa fecha, las diversas unidades de la CNI eran visitadas por la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones humanitarias, a fin de constatar si habían detenidos y en qué estado se encontraban. También asistía normalmente y sin aviso previo, un Ministro de Turno de la Corte de Apelaciones de Santiago, a efectuar rondas o inspecciones a los lugares de reclusión de la CNI, lo que hace poco creíble la versión de la querellante.

Indica que su representado no participó directamente en la detención de la señora Ojeda Aravena, ya que ésta fue detenida en la ciudad de Penco, mientras Sandoval Arancibia, a esa misma hora, participaba de las detenciones en la comuna de Hualpencillo. Sin

embargo tiene claridad en que ella no fue sometida a apremios de ninguna clase en su presencia, ni tampoco ordenó que se le sometiera a tormentos, ya que fue desde un inicio cooperadora y en su momento entregó información que permitió ubicar el barretín de armas en su propiedad en la ciudad de Penco.

Hace presente que las operaciones realizadas por la Agrupación Azul, lo eran por orden de la superioridad institucional y que al terminar las diligencias que les fueron encomendadas, ésta detenida es presentada ante la Fiscalía Militar de Santiago, donde es procesada por la Justicia Militar en causa Rol 332-1981, y condenada por diversos delitos, entre otros, por infracción a la Ley sobre Control de Armas e ingreso ilegal al país, no manifestando en ninguna de sus declaraciones e instancias judiciales haber sido sometida a apremios ilegítimos, torturas o tormentos.

Señala que los dichos de su representado en el proceso y su hoja de vida institucional, muestran la comisión extra institucional en la CNI para el período en cuestión; sin embargo, en sus funciones siempre estuvo la jefatura de la Agrupación Azul encargada del control del MIR, por su vasto conocimiento de dicho movimiento. Reitera que su representado no participó en la detención de la señora Ojeda Aravena, por lo ya expresado, pero que como jefe de la Agrupación estuvo a cargo de los operativos ordenados por la superioridad y que por lo mismo reconoce la responsabilidad del mando en dichas detenciones.

Manifiesta que en todas las declaraciones y antecedentes de autos, no hay reconocimientos ni mayores indicios que sindiquen a su representado como autor directo de los hechos imputados en la acusación, menos aún que tenga responsabilidad en términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal, ya que en su concepto, Sandoval Arancibia no toma parte en la ejecución del hecho de torturas o tormentos, de manera inmediata y directa; tampoco fuerza, induce u ordena directamente a otro a ejecutarlo, y tampoco se conierta para su ejecución o facilita los medios para que se lleve a efecto el delito investigado.

Finalmente aduce que no basta con presumir su participación, sino que ello debe probarse y acreditarse de forma categórica, más allá de toda duda razonable, lo que en el caso de autos está lejos de suceder, por lo que su representado debiese ser absuelto de toda responsabilidad penal, al no tener participación alguna en los hechos.

A continuación hace valer en su favor las siguientes circunstancias minorantes de responsabilidad:

a) Media prescripción o prescripción gradual, contemplada en el artículo 103 del Código Penal, la que es totalmente independiente de la institución de la prescripción como causal de extinción de la responsabilidad penal; funda su solicitud en los más de 40 años transcurridos desde que ocurrieron los hechos, de manera que es plenamente aplicable esta minorante como atenuante de responsabilidad. Sostiene que la aplicación de esta minorante ha sido refrendada por numerosos fallos de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, y en la eventualidad que pudieran los hechos investigados estimarse como un delito de lesa humanidad, ello no obsta a la aplicación de la media prescripción o prescripción gradual. Señala que lo que proscriben las normas internacionales en los llamados ilícitos de lesa humanidad, es la aplicación de la prescripción como institución de extinción de la responsabilidad penal, pero en ningún caso los tratados internacionales han vetado la aplicación de la atenuación de la pena por el transcurso del tiempo, lo que aún es más lógico y ajustado al Derecho Internacional Humanitario, cuando se tiene en cuenta que el delito investigado se llevó a cabo en octubre de 1973 (sic), o sea, hace casi 45 años. Operando la media prescripción o prescripción gradual en favor de su representado, debe reconocérsele por este concepto, dos circunstancias atenuantes muy calificadas, y no existiendo agravantes que lo perjudique, en la eventualidad que se lo condene, ello permite rebajar la pena en dos grados, pena a la fecha de comisión del delito, quedando ésta dentro del presidio menor, lo que también le favorecería para que se le concedan algunas de las penas sustitutivas de cumplimiento alternativo.

b) Irreprochable conducta anterior, prevista en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, ya que a la época de comisión del hecho investigado en autos, gozaba de una intachable, irreprochable conducta anterior. En este caso, su representado mantenía a la fecha de los sucesos investigados, un extracto de filiación libre de toda anotación prontuaria. Asimismo, siendo un Oficial de Ejército de alrededor de 30 años de edad a la fecha de los sucesos, no solo carecía de anotaciones prontuarias en su extracto de filiación, sino que también gozaba de esa irreprochable conducta en el medio social en el que se desenvolvía. A su vez, su hoja de vida institucional, muestra un comportamiento a toda prueba y sin sanciones que cuestionen su idoneidad ética y moral, ya sea en el ámbito jurídico o social.

c) Obediencia de órdenes superiores. Expresa que su representado a la fecha de los hechos siendo Teniente del Ejército de Chile, se encontraba comisionado a la Central Nacional de Informaciones, sujeto a las órdenes y normativa para los funcionarios militares, regido por el Código de Justicia Militar. Transcribe el artículo 6° de dicho Código y sostiene que en estos autos se ha acreditado que su representado formaba parte de la CNI y en dicho contexto, esta organización se sujetaba a normas militares, por lo que su actuar obedece a cumplir órdenes superiores; él no actuaba por iniciativa propia, sino que existía un escalafón y orgánica institucional, en la cual se organizaba su funcionamiento y operación. Que de esta forma, el cumplimiento de órdenes superiores se transforma en una atenuante que debe ser reconocida en la sentencia de autos, no como un reconocimiento de participación de participación en los hechos acaecidos, sino por el hecho que la orgánica institucional de la Central Nacional de Informaciones, institución pública reconocida y creada por Ley, requería para estas eventuales acciones o actividades contar con órdenes superiores o a lo menos órdenes de los respectivos jefes de unidad. Que siendo un funcionario público, la cadena de mando es relevante y una orden superior debe ser cumplida, de manera que no le cabía más que obedecer, por lo que se traslada con su agrupación a

Concepción y procede a las detenciones. Agrega que el acatamiento a las órdenes superiores debe ser considerada para estos efectos como una atenuante respecto de su conducta y también respecto de sus subalternos, quienes a su vez obedecían a su jefe directo, Sandoval Arancibia. Que lo anterior se desprende de la aplicación de los artículos 211, 214 y 334 del Código de Justicia Militar, que transcribe. En atención a las normas citadas, señala que el incumplimiento de una orden expresa, se constituye en delito de desobediencia de órdenes militares y que lo anterior ha sido refrendado reiteradamente en resoluciones de nuestros Tribunales Superiores de Justicia. Finalmente dice que la orden superior recibida por su representado, se encontraba dentro de las atribuciones y funciones que le fueron encomendadas al momento de su traslado, por lo que se trató de “órdenes del servicio”.

Que, para el eventual caso que se esté por aplicar alguna sanción a su representado, esta eventual pena no debe ser superior a la de presidio menor en su grado mínimo, toda vez que el delito se encontraba sancionado a la fecha de comisión con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.

Que, en consecuencia, gozando su representado de las atenuantes especificadas, estas atenuantes muy calificadas, sin que le perjudique alguna agravante, permiten, en el caso de una eventual pena, y conforme lo dispone el artículo 68 inciso 3 del Código Penal, imponer la pena inferior en uno, dos o tres grados al mínimo de los señalados por la ley, según sea el número y entidad de dichas circunstancias.

Solicita la absolución de su representado por total falta de participación en los hechos investigados. En subsidio, y en atención a las circunstancias atenuantes muy calificadas que se han hecho valer, sin que le perjudique agravante alguna, se le aplique el mínimo de las sanciones establecidas en la ley para el delito en cuestión, rebajadas en uno, dos o tres grados.

Finalmente el señor Defensor solicita, para el evento que se imponga a su representado una pena privativa de libertad, se le

conceda alguno de los beneficios de cumplimiento alternativo de penas contemplados en la Ley 18.216, pues estima que en la especie se cumplen todos los requisitos que hacen procedente dicho cumplimiento alternativo.

DECIMO SEPTIMO: Que, en cuanto a la solicitud de absolución de toda responsabilidad penal respecto del acusado Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, al no tener participación alguna en los hechos investigados, habida consideración de lo razonado en los motivos séptimo a décimo quinto de este fallo, y en que además se ha definido el carácter y el grado de participación que al acusado le ha correspondido en delitos reiterados de aplicación de tormentos en detrimento de doña Arinda Ojeda Aravena, **procede rechazar esta petición**, al tenor de lo explicitado en los considerandos señalados, pues, analizadas y ponderadas las probanzas existentes en contra del acusado, ellas han permitido tener por legal y fehacientemente acreditada su responsabilidad en tales ilícitos.

En efecto, la tesis de la defensa en el sentido que en el proceso no ha resultado acreditado en modo alguno que fuera su representado quien cometiera los delitos de tortura en la persona de la señora Ojeda Aravena, es claro que no resultó acreditada, toda vez que el cúmulo de elementos de juicio reunidos durante el curso de la investigación agregados a la causa en el apartado segundo de este fallo, permitieron a la sentenciadora arribar inequívocamente a la conclusión que la víctima fue detenida al salir de su casa habitación en la comuna de Penco, en horas de la mañana del día 16 de abril de 1981, por agentes de la Central Nacional de Informaciones llegados desde Santiago, al mando del acusado Sandoval Arancibia, como ha quedado establecido, y que aquel día realizaron un operativo conjunto tendiente a apresar a militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, previamente identificados por agentes de la CNI de Concepción, sin orden competente que los facultara para la detención de la víctima, seguidamente conducido a un lugar que resultó ser el Fuerte El Morro, donde fue objeto de torturas y apremios ilegítimos por parte de agentes del Estado, y luego trasladada en avión

a Santiago, junto con otros detenidos, en el que también viajaba el acusado Sandoval Arancibia junto con otros agentes bajo su mando, y llevada al Cuartel Borgoño de Santiago, lugar donde éste desempeñaba sus funciones de Jefe de la Agrupación o Brigada Azul, destinada al seguimiento y exterminio del MIR a nivel nacional, y donde fue torturada nuevamente, en términos aún más duros y “ más profesionales” según sostiene.

DECIMO OCTAVO: Que, para el evento que se desestime la alegación de ausencia de participación criminal de su representado, el mandatario del acusado Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, solicita se aplique el mínimo de la pena, haciendo valer, en primer lugar, la institución prevista en el artículo 103 del Código Penal, también llamada “prescripción gradual” o “media prescripción”.

Para resolver como se dirá, preciso es destacar que los delitos de lesa humanidad, como lo son los delitos de torturas, en razón de su especial gravedad, son imprescriptibles, como lo consagra la *“Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad”*, en cuanto reconoce que la imprescriptibilidad de estos crímenes es un principio universal y se expone, en el *“Preámbulo”*, que su función es reconocer una regla de Derecho Internacional ya existente, que forma parte de aquellas normas imperativas que la comunidad internacional considera como no susceptibles de acuerdo en contrario, de conformidad con lo establecido en la *“Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”*.

En este aspecto conviene recordar, como ya hemos dicho, que la Excm. Corte Suprema ha declarado que las disposiciones de esta *Convención* tienen rango de norma de *“ius cogens o principios generales de Derecho Internacional”*.

Sobre la materia podemos mencionar las sentencias de 18 de enero de 2007, Rol N°2666-04, considerando 17° y de 13 de marzo de 2007, Rol N°3125-04, cuyo fundamento 13° señala: *“Que no obstante que la citada Convención (‘Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad’) no se encuentra incorporada a nuestro*

*ordenamiento jurídico como tal, en realidad aquella se limitó a **afirmar la imprescriptibilidad** de tales deplorables hechos...lo que importa el reconocimiento de una norma ya vigente (**ius cogens**) en función del derecho internacional público de origen consuetudinario, confirmando un principio instalado por la costumbre internacional que ya tenía vigencia al tiempo de realización de los sucesos, pues su naturaleza preexiste al momento de su positivización. Desde esta perspectiva, es posible afirmar que la costumbre internacional **ya consideraba** imprescriptibles los crímenes contra la humanidad con anterioridad a la mentada convención y que ésta también era materia común del derecho internacional”.*

Que, por otra parte, la naturaleza jurídica de la prescripción gradual corresponde a la misma naturaleza jurídica de la prescripción total, empero, se distingue de ella en los efectos jurídicos que produce, además de ser de carácter facultativo para el juez respecto a su aplicación, ya que se remite literalmente a las normas de determinación de penas de los artículos 65, 66, 67 y 68 del Código punitivo. Es así como este beneficio procede cuando “*el inculpado se presentare o fuere habido antes de completar el tiempo de la prescripción de la acción penal o de la pena, pero habiendo transcurrido la mitad del que se exige, en sus respectivos casos, para tales prescripciones...*”, debiendo el Tribunal “*considerar el hecho como revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante*”.

Cabe destacar que la doctrina y jurisprudencia han expresado que sus fundamentos se encuentran en las mismas consideraciones de estabilidad social y certeza jurídica que dieron origen al artículo 93 del Código Penal, pero que está destinada a producir sus efectos en aquellos casos en que la realización de los fines previstos para la prescripción no concurren en forma natural sino al cabo de un proceso gradual; esto es, que el lapso necesario para prescribir **está por cumplirse**, lo que justifica la atenuación de la pena, siendo evidente que se trata de aquellos casos que no presentan las características de los delitos de lesa humanidad, por su carácter imprescriptible. En

consecuencia, el fundamento para dicha atenuación es que se trate de un delito común en vías de prescribir, cuyo no es el caso que nos ocupa, pues ha quedado asentado que el delito materia de esta investigación corresponde a un delito de lesa humanidad.

No puede desconocerse que el Estado de Chile ha contraído obligaciones que emanan de los Tratados Internacionales que ha suscrito; el ordenamiento jurídico chileno ha reconocido la primacía del Derecho Internacional sobre el Derecho interno al ratificar la *“Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”*, por lo cual, en casos de conflictos entre uno y otro, Chile está obligado a hacer **prevalecer** las normas de este último. Los Tratados Internacionales mantienen esa preeminencia, en razón de lo preceptuado por el artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República en cuanto expresa: *“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos de los Estados respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”*.

Por ende, tiene aplicación preeminente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 15 N°2 prescribe: *“Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueren delictivos según los principios generales del Derecho Internacional reconocidos por la comunidad internacional”*.

De tales principios emana la obligación de perseguir y sancionar a los responsables de crímenes contra la humanidad, por sobre las instituciones extintivas de la responsabilidad.

En consecuencia, estas fundamentaciones de carácter internacional evidentemente son aplicables a la *“media prescripción”*, ya que se trata de conceder un beneficio previsto por el legislador para **delitos comunes, diferentes de los crímenes contra la humanidad**, en que el transcurso del tiempo no produce efecto alguno.

Que, en síntesis, en el momento de establecerse jurisdiccionalmente la sanción por el delito de torturas, por su especial connotación debe ponderarse dicho carácter, la extensión del mal causado y la gravedad de sus consecuencias para la víctima durante toda su vida futura, lo que exige aplicar un castigo actual y proporcionado, y en atención a las consideraciones hechas valer, corresponde desechar la aplicación en autos de la institución denominada “media prescripción”.

DECIMO NOVENO: Que, en cuanto a la minorante de obediencia de órdenes superiores, a virtud de lo dispuesto en los artículos 211, 214 y 334 del Código de Justicia Militar, desde ya se rechaza la circunstancia modificatoria de responsabilidad penal alegada por la defensa del acusado Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, si se tiene en cuenta que no existe en esta causa, atendida la especial modalidad en que se cometió el delito, antecedente alguno de que éste haya sido el resultado del cumplimiento de una orden de carácter militar, presupuesto básico para alegar el cumplimiento del deber militar, puesto que, sin duda, no lo es, el detener a una persona determinada sin orden judicial competente, luego mantenerla en lugares de reclusión secretos y sometida a toda clase de actos constitutivos de torturas y vejámenes atentorios a su integridad física y psíquica, y a la vez idear el mecanismo con el propósito de alterar tal realidad criminal; conducta que indudablemente no cabe dentro de las órdenes propias del sistema militar.

VIGESIMO: Que, asimismo, la defensa ha señalado que favorece a su defendido la atenuante de irreprochable conducta anterior, prevista en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, ya que a la fecha de cometido el supuesto delito gozaban de una irreprochable conducta anterior. La que pide se estime como muy calificada, por las razones que indica.

Que, de acuerdo a los datos que arroja el proceso, **se reconocerá en favor del encausado** la minorante contemplada en el numeral 6 del artículo 11 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior, según da cuenta su extracto de filiación y

antecedentes, que corre agregado a fojas 410 y siguientes, del que consta que no ha sido condenado con anterioridad a la comisión del ilícito que por esta causa se le imputa.

Que, la solicitud de la defensa en orden a que se la considere como “***muy calificada***”, en los términos del artículo 68 bis del Código Penal, dicha petición **se rechaza**, por cuanto no existen antecedentes que le den sustento; en efecto, su sola configuración como simple atenuante se refiere al desenvolvimiento en la conducta de un individuo en el plano social, familiar, laboral e individual en forma recta, honrada, exenta de reproches; apreciar dicho comportamiento como muy calificado importa de suyo un juicio de valor aún más estricto, el cual de estimarse procedente debe sustentarse en antecedentes relevantes y extraordinarios, con cierto grado de continuidad en el tiempo, lo que no consta en la causa.

VIGESIMO PRIMERO: Que la pena asignada al delito contemplado en el artículo 150 N° 1 del Código Penal, vigente a la época de ocurrencia de los delitos investigados, es la de presidio o reclusión menores y suspensión en cualquiera de sus grados, y concurriendo en la especie una circunstancia atenuante y ninguna agravante, no podrá aplicarse el grado máximo. Es decir la pena de presidio o reclusión que corresponde aplicar va de 541 días a 3 años; empero, por la reiteración, corresponde elevar la sanción en un grado, quedando entonces en presidio o reclusión menores en su grado máximo.

Que, **en la aplicación de la pena en concreto**, esta sentenciadora tendrá muy presente, atendida la especial naturaleza del delito de que se trata, esto es, delito de lesa humanidad, lo previsto en el artículo 69 del Código Punitivo en relación con la mayor extensión del mal producido por el delito.

VIGESIMO SEGUNDO: Que, en relación a la solicitud de la defensa en orden a que se le conceda a su representado alguno de los beneficios de cumplimiento alternativo de penas contemplados en la Ley 18.216, pues estima que en la especie se cumplen todos los

requisitos que lo hacen procedente, para resolver como se dirá, se tendrá presente lo informado por el Centro de Reinserción Social Santiago Sur II a fojas 463 (Tomo II), que expresa que su ingreso a la pena sustitutiva de libertad vigilada o libertad vigilada intensiva no se recomienda debido ya que de acuerdo a las características personales del sujeto en que se advierten necesidades criminógenas que resultarían muy difíciles de modificar por una medida de las características de la pena sustitutiva, observándose arraigo en el tiempo de creencias y distorsiones cognitivas que justifican actos de vulneración de derechos humanos en contexto de dictadura militar, deslegitimando el consenso social al respecto de actos de lesa humanidad; no presenta en la actualidad una disposición al cambio a nivel cognitivo conductual, entregando un discurso donde niega toda participación en los hechos por los que se le acusa, elementos que en su conjunto dificultarían la intervención de un delegado de libertad vigilada. Y atendida, además, la prohibición respecto del tipo penal del artículo 150 del Código Penal, citado en el artículo 1 de la ley 18.216, razones todas por las que no se le concederá ninguna pena alternativa de las que contempla la citada ley,

Por estas consideraciones visto además lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la Republica; artículos 1, 11 N°6, 14, 15, 18, 24, 25, 29, 50, 68, 69, 103 y 150 N° 1 del Código Penal de la época; artículos 10, 40, 108, 109, 110, 111, 434, 456 bis, 457, 459, 464, 473, 474, 488, 500, 501, 502, 503, 504, 505 y 533 del Código de Procedimiento Penal; y artículo 1° de la Ley 18.216, se declara:

I.- Que, se condena a Enrique Erasmo Sandoval Arancibia, ya individualizado en la parte expositiva del fallo, a la pena de **cuatro años de presidio menor en su grado máximo**, accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, en su carácter de autor de los delitos reiterados de aplicación de tormentos perpetrados en contra de doña Arinda del

Carmen Ojeda Aravena, durante varios días, a contar del 16 de abril de 1981.

II.- Que, se le condena al pago de las costas de la causa.

III.- Que no se concede al sentenciado ninguna de las alternativas de cumplimiento que contempla la ley N° 18.216, por lo que deberá cumplir efectivamente la pena privativa de libertad impuesta, ejecutoriada que sea esta sentencia, habida cuenta que no existen abonos de tiempo que considerar, y a continuación de las penas que actualmente cumple en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, sin solución de continuidad.

Notifíquese personalmente al sentenciado. Cúmplase a través de Gendarmería de Chile.

Y a través de correo electrónico consignado en la causa al abogado querellante y al abogado particular del condenado.

Regístrese y cúmplase en su oportunidad con lo dispuesto en el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal.

Consúltese si no apelare.

Rol N° 24-2019.

Dictada por doña Yolanda Méndez Mardones, Ministra en Visita Extraordinaria de la Il.ª Corte de Apelaciones de Concepción.

En Concepción, a uno de diciembre de dos mil veintidós, notifiqué por el estado diario la sentencia precedente.